

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre octubre de 2023 y 19 de enero de 2024.

En este número destacamos:

Sudán
Israel – Palestina
Yemen

Y analizamos también:

ÁFRICA

África occidental
África subsahariana
Burundi – Rwanda – RDC
Chad
Malí
RDC
Somalia – Somalilandia – Etiopía

ÁMERICA

Colombia
Haití
Venezuela – Guyana

ASIA

Bangladesh
China – Taiwán
Filipinas
Myanmar
Pakistán

EUROPA

Armenia – Azerbaiyán
Chipre
Rusia – Ucrania
Serbia – Kosovo

ORIENTE MEDIO

Líbano

Escola de Cultura de Pau

Edifici B13

Carrer de la Vila Puig

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Espanya)

Tel: +34 93 581 14 14

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat

Web: <http://escolapau.uab.cat>



Foto: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters

SUDÁN

El conflicto armado se cronifica y se intensifica en las regiones de Darfur, Kordofán y este del país

Durante los últimos meses el conflicto armado que se desarrolla en Sudán entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF), lideradas por el presidente del Consejo Soberano, el teniente general Abdel Fattah al-Burhan, y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por el vicepresidente del Consejo, el teniente general Mohammed Hamdan Dagalo “Hemedti”, se ha intensificado notablemente en el oeste, sur y este del país (regiones de Darfur, Kordofán y Mar Rojo) y en Jartum, capital del país. Tras ocho meses desde el **estallido de los enfrentamientos armados el 15 de abril de 2023**, la violencia en Sudán se ha cobrado la vida de más de 13.000 personas y alrededor 7,5 millones se han visto desplazadas forzosamente por la violencia.

El **origen de este nuevo conflicto armado en el país** remite a las discrepancias entre el Ejército y el grupo paramilitar RSF a principios de año durante las negociaciones para el establecimiento de un nuevo gobierno de transición, por la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo alusivo a los plazos para la integración de las RSF en el Ejército nacional unificado y el establecimiento de la estructura de mando. Este hecho dio pie al estallido de combates que inicialmente se concentraron en la capital, Jartum, aunque durante el año se fueron intensificando y extendiendo a casi todo el país. De forma paralela, múltiples iniciativas de mediación y negociación de paz han sido desplegadas

por parte de diferentes actores nacionales e internacionales para obligar a las partes a poner fin a las hostilidades y retornar a la mesa de negociaciones. Paralelamente, en los últimos meses las RSF han seguido avanzando, consolidando su dominio territorial en Darfur, controlando a finales de año cuatro de sus cinco estados, lo que ha generado que los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba (2020) rompan su neutralidad en la disputa y emerjan como nuevos actores en la guerra. Esta nueva crisis en el país, originada tras la inestabilidad política en Sudán producto del golpe militar del 25 de octubre de 2021, ha socavado las esperanzas de lograr una transición pacífica e inclusiva y ha puesto en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz de Juba, la consolidación de la paz, el establecimiento del estado de derecho y el desarrollo económico del país. Además, representa una importante amenaza para la estabilidad regional.

Evolución del conflicto armado

En un inicio los enfrentamientos armados entre las SAF dirigidas por al-Burhan y las RSF comandadas por Dagalo se concentraron principalmente en la capital, Jartum, matando a cientos de personas en los primeros días y desplazando a miles de personas. Sin embargo, durante el año se fueron **intensificando y extendiendo los combates**

en casi todo el país, en particular en todos los estados de Darfur (Septentrional, Central, Occidental, Norte y Meridional) Kordofán del Norte y del Sur, Kassala, Gedarif, Mar Rojo o Nilo Azul. El Ejército de Sudán tomó el control de varias ciudades, incluidas Kassala y Port Sudan en el este, mientras que las RSF tenían ventaja en la región de Darfur, y los combates se intensificaron por el control de Jartum. La dinámica del conflicto armado se ha caracterizado por los ataques de las SAF a ciudades con artillería pesada y bombardeos aéreos, mientras que las RSF emplean técnicas de guerra de guerrillas y misiles tierra-aire, al no disponer de aviación.

El conflicto armado se ha ido intensificando y extendiendo en casi todo el país, afectando principalmente a Jartum y Darfur

Si bien durante varios meses los grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Juba, entre ellos Justicia e Igualdad (JEM), el Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán-Norte (MLPS-N)-facción Malik Agar y el Ejército de Liberación de Sudán-facción de Minni Minawi (SLA-MM), declararon su oposición a la guerra y su neutralidad, con el paso del tiempo fueron tomando partida en las hostilidades.

En la región de Darfur el estallido de los enfrentamientos entre las SAF y RSF sumió a la región en la peor crisis desde el fin de la guerra civil. En el mes de mayo, ya con los combates entre las SAF y las RSF intensificados en la región, se agravaron las tensiones intercomunitarias, especialmente entre grupos árabes rizeigat (de donde proviene la mayor parte del personal de RSF) y no árabes masalit. Este incremento de la violencia motivó que el gobernador de Darfur y líder del SLA-MM, Minni Minnawi, pidiera el 28 de mayo a los habitantes de Darfur que se armaran, aumentando el riesgo de guerra civil. Durante los siguientes meses, las RSF se hicieron con el control de amplias regiones de Darfur Central, Meridional, Oriental y Occidental, concentrando su ofensiva sobre Darfur del Sur, que fue capturada en octubre tras la conquista de su capital Nyala, y sobre Darfur del Norte. En noviembre, tras el avance de las RSF hacia El Fasher, capital de Darfur del Norte, diferentes grupos armados signatarios darfurios del Acuerdo de Paz de Juba, cuyos miembros provienen en gran medida de la comunidad zaghawa, renunciaron a la neutralidad y se unieron a las SAF. Este hecho podría tener importantes repercusiones sobre Chad, país donde la comunidad zaghawa domina el gobierno y el Ejército. En diciembre, el Ejército sudanés acusó a Chad (y a Emiratos Árabes Unidos) de facilitar apoyo a las RSF y se produjeron expulsiones recíprocas de personal diplomático.

Las múltiples iniciativas de mediación en Sudán se han caracterizado por su descoordinación

Por otro lado, en Kordofán Sur y Nilo Azul el deterioro de la situación de seguridad motivó que el 8 de junio el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (SPLM-N) se movilizara. A partir de ese momento y hasta finalizar el año, en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, el grupo rebelde SPLM-N siguió ampliando su presencia en la guerra, emergiendo como la tercera fuerza en el conflicto.

Entre otros eventos destacados durante el año, a finales de agosto, después de meses de asedio de las RSF en Jartum, el jefe del ejército, general Abdel Fattah al-Burhan, escapó del cuartel general. Los combates se mantuvieron durante el resto del año en Jartum y la vecina ciudad de Omdurman, y se fueron intensificando también en el este y otras zonas del sur del país. Debido a la crisis de seguridad en el país, a principios de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU decidió la terminación del mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS), el cese de sus operaciones a partir del 4 de diciembre, y el cierre de esta en un período de tres meses, que finalizará el 29 de febrero de 2024.

Negociaciones para la resolución del conflicto

Desde que iniciaron los combates se han activado diferentes esfuerzos e iniciativas de mediación por parte de múltiples actores nacionales e internacionales para poner fin a las hostilidades y retomar las negociaciones de paz. A pesar de los intentos iniciales de la Unión Africana (UA) de garantizar un proceso de mediación coordinado, los espacios de mediación se han superpuesto y no han tenido coordinación ni resultados. Si bien durante el año se logró acordar diferentes altos el fuego (por ejemplo, el 24, 27-30 de abril; 4-11, 22-31 de mayo; 20, 26-27 de junio) y treguas humanitarias, la mayoría tuvieron una duración máxima de 72 horas y en ningún caso se logró el cese de la violencia, sufriendo violaciones continuadas por ambas partes.

Entre las iniciativas de mediación más destacadas, resaltaron la liderada por la **Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD)** y la impulsada por EEUU y Arabia Saudita, aunque también la Liga Árabe, Chad o Egipto impulsaron sus propios espacios. La IGAD conformó el 16 de abril una iniciativa de alto nivel formada por los presidentes de Kenya, Sudán del Sur y Djibouti –que posteriormente se ampliaría también a Etiopía–, para mediar entre las partes. Posteriormente, el 12 de junio, la IGAD, en la Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno, adoptó una hoja de ruta para la resolución del conflicto, nombrando al Presidente de Kenya, William Ruto, presidente de la iniciativa, hecho que motivó su bloqueo por parte del Ejército de Sudán, que se opuso a que Kenya asumiera la presidencia.

Paralelamente, a principios de mayo EEUU y Arabia Saudita impulsaron “conversaciones previas a la negociación” entre las partes en la ciudad de Jeddah (Arabia Saudita). Estas conversaciones dieron lugar a la firma de la **Declaración de Compromiso para Proteger a la Población Civil** el 11 de mayo. Sin embargo, a principios de junio se suspendieron temporalmente las conversaciones a causa de “graves violaciones repetidas” cometidas por

ambas partes y EEUU anunció la imposición de sanciones a cuatro empresas afiliadas a las partes beligerantes. La segunda ronda de conversaciones en Jeddah se desarrolló entre el 26 de octubre y el 7 de noviembre, y en ella actuaron también como cofacilitadores la IGAD y la UA junto con EEUU y Arabia Saudita, en un intento por mejorar la coordinación de las iniciativas. La ronda tampoco supuso avances sustantivos en la resolución del conflicto.

Los esfuerzos de mediación lograron el anuncio, a finales de año, de una reunión presencial en Djibouti entre los líderes de las SAF y RSF, pero esta finalmente fue pospuesta por “razones técnicas”. Dicho encuentro habría representado la primera vez que al-Burhan y Dagalo se reunían desde el inicio de la guerra.

Durante el último trimestre, ambos líderes militares viajaron por la región con el objetivo de recabar apoyos. Al-Burhan se reunió con diferentes mandatarios, entre ellos con los de Egipto, Sudán del Sur y Eritrea, mientras que Dagalo fue recibido por los líderes de Uganda, Etiopía, Kenya, Sudáfrica o Djibouti, lo que fue calificado por parte de al-Burhan como “actos de hostilidad”. Dagalo también se reunió el 2 de enero de 2024 en Addis Abeba con la coalición civil sudanesa liderada por el ex primer ministro, Abdalla Hamdok, Coordinación de las Fuerzas Civiles Democráticas, conocida como Taqaddum. El encuentro dio lugar a una declaración conjunta, la **Declaración de Addis Abeba**, que incluyó compromisos para el retorno de las millones de personas desplazadas a sus hogares, crear pasajes seguros e incluir a civiles en las conversaciones de paz. En la firma del acuerdo, que pretende servir como base para futuras negociaciones y lograr un acuerdo político, el grupo paramilitar anunció que estaba abierto a un alto el fuego inmediato e incondicional y a entablar conversaciones con las SAF, siendo estas rechazadas por al-Burhan.

Más de 13.000 personas han perdido la vida y alrededor de 7,5 millones se han desplazado forzosamente de sus hogares

forzosamente de sus hogares, de las cuales, 1,3 millones son personas refugiadas y más de 6 millones son civiles desplazados internamente, según datos de la **Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)**. Durante el último trimestre del año estas cifras han aumentado considerablemente a medida que la guerra se ha extendido por los estados de Darfur y Gezira, desplazando, solo en diciembre, a unas 300.000 personas en cada una de estas zonas. Asimismo, Naciones Unidas alertó de que en el país las necesidades humanitarias, que ya alcanzaban niveles récord antes de los enfrentamientos con una tercera parte de la población en situación de necesidad de asistencia humanitaria, han aumentado drásticamente durante el año hasta llegar a los 25 millones de personas, añadiendo que la magnitud de la crisis podría desestabilizar toda la región.

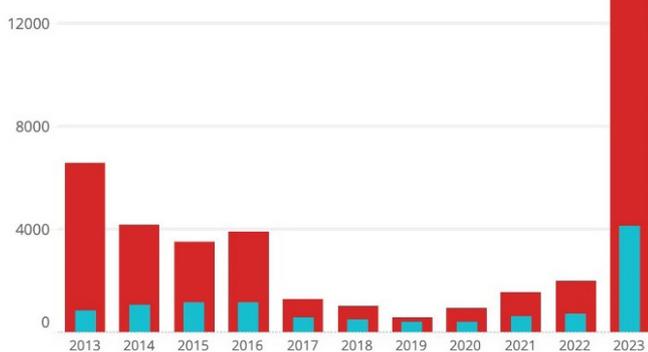
Por otro lado, los datos sobre la intensidad y letalidad del conflicto durante el año recogidos por **ACLED** dan muestra de más de 13.000 muertes en el país por episodios violentos desde que estallaron los primeros combates en abril, concentrándose estas en la capital y en los estados de Darfur. Esta alta intensidad de la violencia en Darfur, provocó que la **Corte Penal Internacional** informara en julio de la apertura formal de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en Darfur después de que la ONU denunciase el descubrimiento de varias fosas comunes con cadáveres de al menos 87 personas de la comunidad masalit en Darfur Occidental. Amnistía Internacional, en un informe publicado en agosto, “**Death Came To Our Home: War Crimes and Civilian Suffering In Sudan**”, también documentó la comisión de crímenes de guerra generalizados cometidos por ambas partes en el conflicto. Estos hechos generaron que el 11 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptase la **Resolución A/HRC/RES/54/2** en la que estableció una Misión Internacional de Investigación Independiente para Sudán con el mandato de investigar y establecer los hechos, circunstancias y causas fundamentales de todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos, así como violaciones del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado.

Situación humanitaria

Desde que estalló la guerra a mediados de abril, más de **7,5 millones de personas se han visto desplazadas**

Evolución de la violencia en Sudán en la última década

Enero 2013 - Diciembre 2023



Fuente: ACLED (J. Luengo-Cabrera)

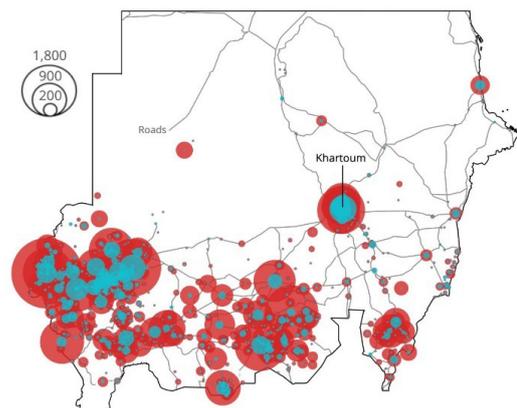




Foto: United Nations Photo

ISRAEL – PALESTINA

Violencia sin precedentes en Gaza y crecientes indicios de genocidio

Los acontecimientos que han sacudido a Oriente Próximo desde octubre de 2023 no solo han abierto un nuevo e incierto capítulo en la longeva cuestión palestino-israelí. También han generado una gran inestabilidad y volatilidad en toda la región y han abocado a Gaza a una situación de violencia y destrucción de una magnitud sin precedentes en la historia reciente, con gravísimas consecuencias para la población civil palestina que afronta una situación absolutamente desesperada. La escalada se inició el 7 de octubre, cuando un inédito y cruento ataque de Hamas contra localidades israelíes y un festival de música en una zona adyacente a Gaza causó la muerte de unas 1.200 personas, israelíes y extranjeras, mientras que alrededor de 200 fueron tomadas como rehenes, incluyendo menores y personas ancianas. La ofensiva protagonizada por milicianos de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, brazo armado de Hamas, y de la Yihad Islámica causó un enorme trauma en la sociedad israelí. El Gobierno de Netanyahu se declaró en “estado de guerra” y anunció una operación para destruir y eliminar a Hamas. Israel impuso un asedio total contra la Franja, bloqueando completamente el acceso de medicinas, alimentos y servicios de agua y electricidad, intensificando así un bloqueo al que ya sometía a la Franja desde que en 2007 Hamas llegó al poder del territorio y Gaza fue declarada como “entidad hostil”. Paralelamente, el Estado israelí inició una campaña de intensos ataques aéreos y, tras ordenar a la población palestina que se desplazara al sur

de la Franja, a finales de octubre comenzó también una operación terrestre desde el norte de Gaza.

Desde las primeras semanas, las acciones israelíes desde tierra, mar y aire sobre Gaza causaron la muerte de miles de civiles palestinos. Hasta mediados de enero de 2024, tras más de 100 días de hostilidades, **la incesante campaña israelí contra la Franja había causado la muerte de más de 25.000 palestinos**, de los cuales se estima que un 70% eran mujeres y menores de edad. Otros 8.000 estarían sepultados bajo los escombros. Los niveles de destrucción y letalidad en Gaza están siendo de una magnitud que apenas tiene parangón en la historia reciente. A modo de ejemplo, en 2021 en Afganistán –entonces el conflicto armado más cruento a nivel mundial– murieron 40.000 personas, pero en el transcurso de un año. Según alertaba OXFAM a principios de 2024, **la tasa de mortalidad diaria en Gaza a causa de la ofensiva israelí –una media de 250– era más alta que en cualquier otro conflicto armado del siglo XXI**. Israel está utilizando **armamento con un enorme potencial destructivo en Gaza –según analistas, con efectos más severos que otras campañas militares**, como la de la coalición internacional contra Estado Islámico en Siria e Iraq o, proporcionalmente, la de la ofensiva aliada contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial–, causando estragos en un territorio de 365 kilómetros cuadrados que está entre los más densamente poblados a nivel mundial. Además de causar muertes y

dejar más de 62.000 personas heridas -algunas de ellas por los efectos de armas como el **fósforo blanco, por cuyo uso también ha sido denunciado Israel-**, los bombardeos han destruido total o parcialmente el 60% de las viviendas en Gaza. De los 2,3 millones de habitantes de la Franja, **1,7 millones –equivalentes a 75% de la población–, se habían visto obligados a huir, en múltiples ocasiones en algunos casos, según datos de UNRWA.** Los continuos ataques israelíes han forzado a la población palestina a desplazarse a áreas cada vez más pequeñas, primero de norte a sur y luego hacia el oeste, ya que los bombardeos han afectado zonas y rutas inicialmente señaladas como “seguras” por Israel. Los desplazamientos han alimentado las memorias de la Nakba (catástrofe), la expulsión forzada de más de 750.000 palestinos en el marco de establecimiento del Estado de Israel y la primera guerra árabe-israelí. Escuelas, universidades y también hospitales han sido objeto de reiterados ataques, disminuyendo hasta niveles críticos la capacidad de ofrecer asistencia a personas heridas y enfermas. **Menos de la mitad de los hospitales de Gaza estaban operativos** –15 de 36– y sólo ofrecían servicios limitados, según datos de la OMS.

A principios de 2024, cerca de la mitad de la población de Gaza se concentraba en la localidad de Rafah (frontera con Egipto) en condiciones de extrema precariedad, y **el PMA advertía que prácticamente toda la población gazatí afrontaba un riesgo inminente de hambruna.** El hacinamiento, la falta de higiene, las graves carencias de combustible, alimentos y medicinas, además del frío del invierno, estaban alentando la **proliferación de enfermedades que, según alertaba la ONU, podrían provocar incluso más muertes que los bombardeos israelíes.** La violencia y la gravísima crisis humanitaria afectaban de manera especial a los niños y niñas. Los datos indican que cerca de 10.000 menores habían muerto en las hostilidades. Ya a finales de octubre Save the Children advertía que el número de menores asesinados en Gaza superaba el de todas las muertes violentas de niños y niñas en contextos de conflicto armado en todo el mundo desde 2019 y UNICEF constataba en diciembre que la Franja se había convertido en el lugar más peligroso del mundo para ser un menor. Las consecuencias se anticipaban graves y de largo plazo para miles de menores palestinos heridos o mutilados – un millar han perdido una o las dos piernas desde octubre– y por el trauma y las consecuencias psicológicas ante condiciones tan extremas, incluyendo bombardeos constantes y la pérdida de padres, madres y familias enteras. El personal médico incluso ha tenido que acuñar un nuevo acrónimo, WSNSF (del inglés *wounded child, no surviving family*) para identificar a menores que se han convertido en los únicos supervivientes de sus familias. ONU Mujeres y organizaciones de mujeres palestinas también han denunciado algunos impactos específicos, incluyendo en las mujeres embarazadas, algunas **sometidas a cesáreas**

Los niveles de destrucción y letalidad en Gaza por parte de Israel están siendo de una magnitud que apenas tiene parangón en la historia reciente

sin anestesia. Paralelamente, en Cisjordania, la situación ha empeorado significativamente. Antes de los hechos de octubre, en esta zona ya se registraban los peores niveles de letalidad en dos décadas. En el último trimestre se intensificaron las operaciones militares israelíes en el territorio –incluyendo ataques aéreos–, las restricciones de movimiento, las detenciones masivas y los ataques de colonos que, actuando en un contexto de impunidad, protagonizaron numerosos asaltos contra población y propiedades palestinas y propiciaron aquí también desplazamientos forzados. Más de 500 palestinos y palestinas murieron en Cisjordania en 2023, la peor cifra desde 2005.

Obstáculos para un cese el fuego y la ayuda humanitaria

Pese a la gravedad de la situación, en los últimos meses no se ha conseguido establecer un cese el fuego ni garantizar el acceso de la ayuda humanitaria necesaria para la población de Gaza, sometida en la práctica a un castigo colectivo. A finales de noviembre, Qatar –con el apoyo de Egipto y EEUU– consiguieron que Israel y Hamas acordaran una tregua que estuvo vigente durante una semana. Más de un centenar de rehenes –86 israelíes y 24 extranjeros– fueron liberados por el grupo islamista en este período, a cambio de la excarcelación de cerca de 240 mujeres y menores palestinos, buena parte de ellos mantenidos en prisión por Israel bajo la **polémica figura de “detención administrativa”.** Los intentos por promover un acuerdo similar no han prosperado desde entonces, a excepción del **pacto, en enero de 2024** –también por mediación de Qatar, esta vez con ayuda de Francia– para que Israel permitiera el ingreso a Gaza de medicinas y otros suministros básicos bajo la condición de que los rehenes que permanecen retenidos por Hamas pudieran recibir también tratamiento médico.

La situación ha sido objeto de intensos y acalorados debates en Naciones Unidas y ha evidenciado los enormes retos de la organización internacional en un contexto de enormes tensiones políticas y en el que la amenaza y el ejercicio del veto por EEUU ha resultado crucial para Israel. Además de garantizar un apoyo militar decisivo para el Gobierno israelí, Washington –y también numerosos gobiernos europeos, entre otros actores– se ha negado a exigir públicamente un cese el fuego para no comprometer el “derecho a la autodefensa” esgrimido por el Estado israelí. Un planteamiento cuestionado por otros actores y expertos en derecho internacional que **objetan el derecho invocado por Israel para librar su ofensiva militar en Gaza,** en parte porque se trata de un territorio ocupado y controlado por Israel. En los últimos meses el Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado más de 15 reuniones sobre la cuestión palestina-israelí

y de Oriente Próximo, y ha valorado y votado casi una decena de borradores de resolución, pero ha aprobado solo dos. Tras numerosas discusiones, la resolución 2712 del 15 de noviembre se limitó a hacer un llamamiento a “establecer pausas y corredores humanitarios en Gaza por un número de días suficiente” para permitir el acceso de ayuda y a una liberación sin condiciones de los rehenes. Tres semanas después, tras el colapso del acuerdo de tregua entre Israel y Hamas, António Guterres invocó el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas –que faculta al secretario general para llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre un asunto que amenaza la paz y seguridad internacional y utilizado de manera excepcional en la historia de la ONU– para demandar un “cese el fuego humanitario” y “evitar una catástrofe humanitaria”. Sin embargo, la propuesta de resolución presentada ante el Consejo de Seguridad dos días después no prosperó debido al veto de Washington. Después de varias postergaciones y cambios para evitar un nuevo veto de EEUU, el 22 de diciembre se aprobó la resolución 2720 –con las abstenciones de EEUU y Rusia– que reitera la demanda sobre los rehenes y llama “a adoptar pasos urgentes para permitir el acceso seguro, ampliado y sin trabas de la ayuda humanitaria y a crear las condiciones para un cese de hostilidades”. La ONU y ONG coinciden en que la ayuda que está llegando a Gaza es ínfima para las ingentes necesidades de la población y han alertado de que el problema no son solo las restricciones de acceso, sino las extraordinarias dificultades para la distribución dado el nivel de destrucción y la violencia incesante. Condiciones a las que se suman las numerosas muertes de personal humanitario a causa de los ataques israelíes, 147 solo en el caso de UNRWA. Cabe destacar que la situación en Gaza ha escenificado la creciente distancia entre la ONU e Israel, que ya venía ignorando sistemáticamente resoluciones de la organización y cuestionando e imponiendo obstáculos al trabajo de agencias y relatores de Naciones Unidas. A finales de octubre, el Gobierno israelí llegó incluso a exigir la renuncia del secretario general, después de que Guterres recordara –tras condenar inequívocamente los ataques del 7 de octubre– que **la acción de Hamas no se había producido “en el vacío”** y que era necesario tener en cuenta los “56 años de ocupación sofocante padecidos por la población palestina”.

Crímenes de guerra, contra la humanidad e indicios de genocidio

Ante esta deriva de acontecimientos, numerosas voces vienen llamando la atención sobre la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad en los últimos meses y vulneraciones al derecho internacional humanitario. Se ha advertido sobre los riesgos de “normalizar” este tipo de prácticas, creando graves precedentes y agravando la sensación de impunidad y los agravios por los dobles

raseros y respuestas dispares en diferentes contextos. La Corte Penal Internacional (CPI) ya tiene abierto un expediente sobre Palestina en el que investiga tanto a Israel como a Hamas por hechos ocurridos en Gaza en el verano de 2014 –Palestina es parte del Estatuto de Roma y reconoce la jurisdicción de esta corte, no así Israel. La fiscalía ha recibido ahora peticiones para que se investigue lo ocurrido desde el pasado 7 de octubre por parte de varios países y de otros actores, como familiares de los rehenes y también asociaciones internacionales de prensa. Ello, considerando que **ya han muerto entre 83 y 110 profesionales de la información**, según diferentes estimaciones –la inmensa mayoría palestinos en ataques israelíes–, convirtiendo a Gaza en el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

La fiscalía de la CPI ha recibido peticiones para que se investigue lo ocurrido desde el pasado 7 de octubre y Sudáfrica presentó una demanda ante la CIJ contra Israel por actos de genocidio

Paralelamente, con el transcurso de las semanas, se han multiplicado las alertas, incluyendo por parte de personas expertas, sobre la comisión de actos constitutivos de genocidio en Gaza. En esta línea, a finales de 2023 Sudáfrica presentó una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusándole de vulnerar sus obligaciones como Estado parte de la Convención contra el Genocidio, con la intención de que esta institución –máximo tribunal de justicia de la ONU– valore los hechos y, en lo inmediato, pueda eventualmente adoptar medidas cautelares para detener la ofensiva israelí. La demanda describe numerosos actos (y omisiones) de Israel con el fin de demostrar la comisión de actos de genocidio, entendido como la destrucción total o parcial de un pueblo a través de matanzas, daños severos físicos y mentales y la creación de condiciones que hacen la vida imposible, entre otros elementos. Sudáfrica también recopila múltiples declaraciones de altos dirigentes israelíes para intentar demostrar la intencionalidad de estas acciones, incluyendo el lenguaje deshumanizador con el que se ha calificado a los palestinos como “animales humanos”, las afirmaciones que asimilan a toda la población de Gaza con Hamas y referencias con las que se pretende justificar el asesinato de civiles, incluyendo niños. **La CIJ puede tardar años en analizar en detalle estos antecedentes, pero en pocas semanas podría pronunciarse sobre si algunos de estos hechos caen dentro de su ámbito de competencia y ordenar medidas preventivas** que podrían imponer obligaciones legales a Israel. En otros casos previos, como el de Ucrania v/s Rusia en 2022, la CIJ ordenó a Moscú la inmediata suspensión de las operaciones militares.

Perspectivas a corto plazo

A principios de 2024 se ha hecho más evidente la intensificación de las tensiones regionales derivadas de la situación en Gaza, con un mayor número de protagonistas y una multiplicación de incidentes en diversos escenarios: Líbano, Irán, Siria, Iraq, el Mar Rojo (véase sección Oriente Medio en esta publicación). Aunque las actitudes iniciales

de algunos actores como EEUU, Irán o Hezbollah parecían indicar la apuesta por respuestas calibradas para evitar una escalada mayor y una confrontación regional abierta, el aumento de las acciones violentas y las respuestas militarizadas incrementa los riesgos. Netanyahu también continúa apostando abiertamente por continuar con su ofensiva hasta una “victoria total” y ha advertido que ni la CIJ ni las fuerzas del “eje de la resistencia” –como se autodenominan los grupos político-militares con agendas contrarias a Israel y Occidente liderados por Irán– frenarían su campaña. No obstante, dentro y fuera de Israel hay voces que ponen en duda las ambiciones de su plan, enfatizando la incapacidad de erradicar a Hamas por su condición de movimiento militar, político y social y por las perspectivas de que la resistencia palestina continuará de alguna manera mientras persista la ocupación. Desde la perspectiva militar, análisis indican que Hamas aún mantendría capacidades para continuar lanzando ataques y emboscadas contra las fuerzas israelíes. Netanyahu también enfrenta críticas, incluyendo dentro de su Gobierno, por su reticencia a abordar los planes concretos para “el día después” de Gaza tras el fin de la ofensiva militar israelí. El dirigente, que apuesta por la prolongación de la campaña y por mantener el conflicto en alto nivel de intensidad como vía para su supervivencia política, insistió recientemente en su rechazo a un Estado palestino y subrayó que, tras la derrota de Hamas, Israel debería controlar la seguridad desde el río Jordán al Mediterráneo. Aunque no se trata de una postura novedosa en su ideario político, el planteamiento tan explícito de Netanyahu ha hecho evidente el pulso con el Gobierno de Biden, que insiste en la solución de dos Estados. Según algunos análisis, la actual coyuntura de mayor inestabilidad regional, innegable agravamiento de los padecimientos de la población de Gaza y el creciente costo político interno en algunos países por no reaccionar ante la ofensiva israelí- **podría favorecer mayores presiones internacionales sobre Israel para cesar sus ataques** y abrir canales diplomáticos. Tras

Situación en Gaza



Fuente: OCHA OPT, 22 de enero de 2024.

A principios de 2024 se ha hecho más evidente la intensificación de las tensiones regionales derivadas de la situación en Gaza

las afirmaciones de Netanyahu, el secretario general de la ONU destacó que el rechazo al derecho a autodeterminación de la población palestina era inaceptable. El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, también defendió la fórmula de dos Estados y cuestionó públicamente el apoyo que en el pasado Israel ha dado a Hamas con el fin de debilitar a la Autoridad Palestina.



Foto: UN Photo/Heba Naji

YEMEN

Escalada de tensión en el Mar Rojo

La significativa escalada de tensiones que ha afectado a distintas áreas de Oriente Medio a causa de la crisis de Gaza ha tenido entre sus escenarios más destacados el Mar Rojo. Pocos días después del ataque de Hamas y del inicio de la ofensiva israelí sobre la Franja, el grupo armado yemení conocido como al-houthistas o Ansar Allah –que controla la capital y una parte importante del norte del país– anunció su solidaridad con Palestina y advirtió sobre represalias contra Israel y también contra EEUU si se involucraba en Gaza. Desde una posición declaradamente contraria a Washington y Tel Aviv –una postura que forma parte de su ideario político desde hace décadas los al-houthistas comenzaron ya a mediados de octubre a lanzar ataques con misiles y drones. Las acciones se dirigieron primero contra territorio israelí. A finales de octubre, varios misiles y drones lanzados desde Yemen fueron interceptados por fuerzas de EEUU e Israel y los al-houthistas, tras reconocer la autoría, advirtieron que continuarían estas acciones hasta que Israel detuviera su ofensiva sobre Gaza.

A mediados de noviembre, el líder del grupo yemení, Abdulmalik al-Houthi, anunció que los ataques también se dirigirían contra naves israelíes en el Mar Rojo. Por esas fechas Israel interceptó un misil tras la activación

La significativa escalada de tensiones que ha afectado a distintas áreas de Oriente Medio a causa de la crisis de Gaza ha tenido entre sus escenarios más destacados el Mar Rojo

de las alarmas antiaéreas en la localidad de Eilat (sur) y los al-houthistas protagonizaron una mediática acción contra un barco mercante –el Galaxy Leader, con bandera de Bahamas–, que según trascendió era propiedad de uno de los hombres más ricos de Israel. Los al-houthistas difundieron un vídeo de la toma de control del barco por parte de un grupo de hombres enmascarados que desembarcaron desde un helicóptero y tomaron como rehenes a los 25 miembros de la tripulación.

Los al-houthistas anunciaron entonces que actuarían contra cualquier nave que tuviera relación con o que se dirigiera a Israel y reiteraron que la suspensión de sus operaciones dependía del fin del asedio a Gaza y de la entrada de alimentos y medicinas a la Franja. La flota estadounidense desplegada en el área intervino para interceptar cohetes y evitar la captura de varios barcos hasta que, a mediados de diciembre, Washington anunció el establecimiento de la Operación Guardián de la Prosperidad –integrada por una veintena de países–, con la intención declarada de contrarrestar y disuadir los ataques al-houthistas y proteger la ruta comercial en el Mar Rojo. Los ataques en esta crucial ruta, que concentra el 15% del tráfico marítimo mundial, ya habían derivado en que algunas navieras optaran por vías alternativas, más largas y costosas, rodeando África.

En los primeros días de enero, EEUU y un grupo de países advirtieron a los al-houthistas que actuarían si no frenaban sus ataques y el 12 de enero el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó –con los votos en blanco de Rusia, China, Argelia y Mozambique– una **resolución (2722)** que exigía al grupo yemení poner fin a sus ofensivas en el Mar Rojo. Dos días más tarde, EEUU y Reino Unido lanzaron ataques contra posiciones al-houthistas en varias ciudades controladas por el grupo yemení y aseguraron haber afectado sus capacidades ofensivas. Desde entonces, las hostilidades y los ataques cruzados han continuado. Esta ofensiva liderada por EEUU ha sido considerada como una prueba de la expansión de la crisis de Gaza y como el inicio de una nueva fase del conflicto en Oriente Próximo, en un espacio geográfico más amplio y con un mayor número de actores directamente implicados. Diversos análisis han subrayado los riesgos derivados de la escalada militar en la zona, enfatizando **que los ataques probablemente no disuadirán a los al-houthistas, sino que, por el contrario, podrían alentar nuevas ofensivas del grupo yemení**, incluyendo acciones contra intereses estadounidenses y británicos en la zona del Golfo con misiles de mayor alcance.

El grupo estaría mejor preparado y equipado de lo que muchos observadores esperan y no se puede subestimar su temeridad ni disposición a continuar la escalada. La deriva de acontecimientos, de hecho, beneficia a los al-houthistas al reforzar su apoyo local e internacional, ya que le permite proyectarse como un grupo decidido a desafiar a Occidente y defender la causa palestina, frente a la posición de otros actores del mundo árabe. **La escalada en el Mar Rojo también conviene al Gobierno israelí**, en la medida que no le afecta significativamente –los ataques han reducido en un 85% la actividad en Eliat, pero este puerto solo acoge un 5% del comercio marítimo de Israel–; desvía la atención de la situación en Gaza –los ataques de EEUU y Reino Unido se iniciaron el mismo día que Israel se defendía de las acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya–; y supone una implicación directa de EEUU, su principal aliado, frente a un actor considerado aliado de Irán, un adversario común. No está claro el papel que puede haber jugado Teherán en las acciones recientes de los al-houthistas. Pese a que la relación entre Irán y los al-houthistas se ha estrechado en los últimos años, Teherán tiene un ascendiente más limitado sobre el grupo yemení en comparación con otras de las milicias que están dentro de su órbita y, por tanto, una menor capacidad para influir para una eventual contención.

El incremento de la tensión en el Mar Rojo también amenazaba con repercutir en las negociaciones para abordar el conflicto armado en Yemen

El incremento de la tensión en el Mar Rojo también amenazaba con repercutir en las negociaciones para abordar el conflicto armado en Yemen. Durante 2023, en un escenario favorecido por el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán en marzo tras la mediación de China, avanzaron los contactos entre Riad y los al-houthistas para intentar poner fin a una guerra que ha causado cientos de miles de víctimas mortales y que ha conducido al país a una de las peores crisis humanitarias a nivel mundial. Al final del año las partes habían avanzado lo suficiente en un acuerdo como para que el enviado especial de la ONU anunciara en diciembre que los al-houthistas y el gobierno internacionalmente reconocido –apoyado por Riad–, estaban comprometidos para fijar los términos de un nuevo cese el fuego de alcance nacional y una hoja de ruta para abordar los retos del futuro político de Yemen.

Las perspectivas de este proceso de diálogo, sin embargo, estaban en entredicho ante los nuevos acontecimientos, incluyendo la **decisión de Washington de volver a incluir a los al-houthistas en su lista de grupos terroristas**. Según algunas informaciones de prensa, también EEUU estaba presionando a Arabia Saudita para que postergara el acuerdo con los al-houthistas y se sumara a la coalición internacional contra el grupo yemení. La reactivación del conflicto con los al-houthistas, sin embargo, va en contra de los intereses de Riad, que después de ocho años involucrado en una cruenta campaña militar en Yemen estaba apostando decididamente por una retirada. Su implicación en Yemen ha sido más larga y costosa de lo que esperaba y tampoco ha conseguido sus objetivos: ni la restauración del gobierno yemení al que apoyaba, ni la derrota de los al-houthistas, actor del que recela por sus vínculos con Irán. Por el contrario, esta aproximación militarizada a la crisis yemení ha resultado en un fortalecimiento de los al-houthistas, que han reforzado sus relaciones con Irán en el marco del conflicto armado. En la nueva encrucijada, **Riad ha evitado alinearse con Washington** y ha optado por hacer llamamientos a la contención y a evitar una escalada, ya que una de sus prioridades sería no convertir a su territorio en objeto de nuevos ataques transfronterizos del grupo yemení. Ante este escenario regional, China se perfila como un posible actor mediador. Beijing, que en los últimos años ha manifestado un mayor interés por implicarse en los asuntos de Oriente Medio, ha exigido el fin del acoso y los ataques a barcos en el Mar Rojo, pero también ha criticado indirectamente la ofensiva de EEUU y Reino Unido y ha instado a prevenir un mayor deterioro en la situación de seguridad en la región.

ÁFRICA

ÁFRICA OCCIDENTAL: Sierra Leona y Guinea-Bissau denuncian intentos de golpes de Estado

ÁFRICA SUBSAHARIANA: Tres importantes misiones de paz y estabilización de Naciones Unidas (Malí, Sudán y RDC) cierran sus operaciones

BURUNDI – RWANDA – RDC: El grupo armado RED-Tabara lleva a cabo una escalada de las acciones en Burundi desde sus bases en RDC y se agrava la tensión entre Burundi y Rwanda

CHAD: La aprobación de la Constitución en un referéndum impulsado por la Junta Militar permitirá la elección del presidente de la Junta, Mahamat Déby, en los comicios de 2024

MALÍ: Se rompe el Acuerdo de Paz de Argel de 2015 y se reinician los enfrentamientos entre los grupos árabe-tuareg signatarios y el Ejército maliense en el norte del país

RDC: Acusaciones de fraude en un clima de violencia política con el trasfondo de la guerra en el este amenazaron con desestabilizar aún más el país

SOMALIA – SOMALILANDIA – ETIOPÍA: El acuerdo entre Etiopía y Somalilandia sobre el reconocimiento de la región desestabiliza el Cuerno de África y frustra el diálogo entre Somalia y Somalilandia

ÁFRICA OCCIDENTAL

Sierra Leona y Guinea-Bissau denuncian intentos de golpes de Estado

En apenas cinco días dos los países de África Occidental, Sierra Leona y Guinea Bissau, padecieron intentos fallidos de golpes de Estado por parte de las estructuras militares. Ambos países habían sufrido intentos golpistas anteriormente, en Sierra Leona cuatro meses antes y en Bissau en febrero de 2022. Estos intentos golpistas han vuelto a agitar la región occidental del continente, que se ha caracterizado en los últimos años por concentrar la mayoría de los golpes militares en África, y hoy cuenta con **Juntas Militares gobernando en Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger.**

Sierra Leona padeció el 26 de noviembre un asalto coordinado contra los principales cuarteles en la capital, Freetown, y en la Prisión Central de Freetown, de la que fueron liberados 1.890 reclusos. El Gobierno denunció el **intento de golpe de Estado y decretó la imposición de un toque de queda** en todo el país que se mantuvo hasta el 20 de diciembre. El ataque fue repelido por las Fuerzas Armadas que anunciaron el mismo día la detención de 13 oficiales militares sublevados. En total unas 20 personas perdieron la vida, entre ellas una docena de soldados. Posteriormente el Gobierno anunció la detención de otros 43 miembros del personal militar, y acusó al expresidente Ernest Bai Koroma de estar detrás del golpe, decretando su confinamiento. El bloque regional de África Occidental, CEDEAO, condenó el intento golpista y ordenó el despliegue de una misión de estabilización del organismo en Sierra Leona.

Paralelamente al intento fallido en Sierra Leona, durante la noche del 30 de noviembre y el 1 de diciembre se registraron enfrentamientos armados entre la Guardia Nacional y las fuerzas especiales en Bissau, que dejó dos muertos. El presidente de Guinea Bissau, Sissoco Embaló, calificó el incidente como **un intento de golpe de Estado**, y el 4 de diciembre disolvió el parlamento dominado por el Partido Africano para la Independencia

de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), solicitando nuevas elecciones sin fijar fecha. El Gobierno acusó al ministro de Economía y Finanzas, Souleiman Seidi, y el secretario del Tesoro, Antonio Monteiro, de artífices del intento de desestabilización, después de que ambos fueran detenidos el 30 de noviembre por acusaciones de corrupción. Este hecho fue el detonante de los enfrentamientos, ya que la Guardia Nacional, que depende del Ministerio del Interior alineado con el PAIGC, trató de liberar a los dos encausados. Desde ese momento han aumentado las tensiones entre el Gobierno y la oposición, y el 20 de diciembre el presidente destituyó al primer ministro Geraldo Martins nombrando un nuevo ejecutivo.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Tres importantes misiones de paz y estabilización de las Naciones Unidas (Malí, Sudán y RDC) cierran sus operaciones

En los últimos meses del año se han cerrado o anunciado el cierre de tres importantes misiones de Naciones Unidas en África Subsahariana, dos de ellas con mandatos de mantenimiento de la paz (Malí y RDC) y otra misión de asistencia política (Sudán), lo que puede dibujar un nuevo escenario para la construcción y el mantenimiento de la paz en África Subsahariana. En Malí las tensiones generadas desde la llegada al poder de la Junta Militar, tras el golpe de Estado en mayo de 2021, con sus socios occidentales, provocó también que la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el país (MINUSMA) se viera afectada. Tras meses de acusaciones mutuas y de bloqueos por parte de la Junta Militar al desarrollo de las funciones de la MINUSMA, a mediados de año la Junta Militar de Malí revocó el consentimiento de la MINUSMA y anunció la decisión de cerrarla. Este hecho provocó que el **Consejo de Seguridad de la ONU acordase el 30 de junio su fin**, el cese de operaciones, la transferencia de tareas y la retirada del personal antes del 31 de diciembre de 2023. La decisión generó múltiples críticas, destacando las provenientes de la coalición de grupos armados signatarios del Acuerdo de Paz de Argel, el Marco Estratégico Permanente (CSP), quien denunció

que la salida de la misión de la ONU “sin una alternativa creíble” asestaría un “golpe fatal” al acuerdo de paz. Desde el inicio en el mes de julio del proceso de retirada de la MINUSMA y la entrega de sus 12 bases militares al Estado maliense, se ha reiniciado el conflicto armado en varias regiones del norte del país (Tombuctú, Kidal o Gao) con enfrentamientos entre los grupos del CSP y el Ejército maliense, ayudado por miembros del Grupo Wagner. La MINUSMA completó la retirada de tropas con la entrega de las bases de Sévaré (región de Mopti) y de Tombuctú los días 8 y 28 de diciembre, respectivamente. Además, a la retirada de la MINUSMA se sumó el anuncio de la disolución de la coalición regional antiyihadista G-5 Sahel después de que Burkina Faso y Níger **anunciaran el 2 de diciembre su retirada de la alianza**, siguiendo los pasos que anteriormente había realizado Malí. Los dos miembros restantes, Mauritania y Chad, reconocieron que la salida de tres de los cinco miembros fundadores representaba **la disolución de facto de la alianza** creada en 2014. En RDC, al igual que en Malí, el Gobierno congolés solicitó en septiembre al Consejo de Seguridad el fin de la misión de mantenimiento de la paz en el país. La MONUSCO, desplegada desde hace más de dos décadas, completará su **salida definitiva para finales de 2024**. Para ello se anunció un plan de tres fases para consumir la retirada de sus más de 15.000 efectivos, que se iniciará en la provincia de Kivu Sur a finales de abril, y posteriormente se ejecutará en las provincias de Kivu Norte e Ituri. De este modo se pondrá fin a la que durante muchos años fue la fuerza de la ONU de mayor tamaño a nivel mundial, cuyo mandato no ha logrado reducir la inestabilidad y consolidar la paz en el este del país.

Finalmente, en Sudán, la crisis de seguridad en el país generada por el inicio del conflicto armado entre los actores militares de la Junta, motivó que a principios de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU votara a favor de la terminación del mandato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (UNITAMS). En la **resolución 2715 (2023)** se acordó el cese de todas sus operaciones a partir del 4 de diciembre y el cierre definitivo de la misión en un período de tres meses, que finalizará el 29 de febrero de 2024. En este caso resulta significativo recordar que la UNITAMS se creó en julio de 2021 como una misión política especial después del cierre, a finales de 2020-principios de 2021, de la Operación Híbrida de la UA y la ONU en Darfur (**UNAMID**), y cuya la finalidad era seguir brindando apoyo a Sudán durante su transición política hacia un gobierno democrático que se ha visto truncado por el estallido del nuevo conflicto armado.

BURUNDI – RWANDA – RDC

El grupo armado RED-Tabara lleva a cabo una escalada de las acciones en Burundi desde sus bases en RDC y se agrava la tensión entre Burundi y Rwanda

El grupo insurgente burundés RED-Tabara, con base en la República Democrática del Congo (RDC), se enfrentó el 10

de diciembre con el Ejército burundés en la provincia de Bubanza (Burundi), matando a tres soldados, y el 22 de diciembre lanzó un **ataque en la ciudad de Vugizo**, cerca de la frontera con RDC, zona en la que el grupo armado tiene su presencia. El **Gobierno señaló que la redada causó la muerte de 19 civiles y un policía** (entre ellos 12 menores y tres mujeres), además de nueve heridos, mientras que RED-Tabara reivindicó la muerte de nueve militares y un policía, y señaló que el ataque tuvo como objetivo el puesto fronterizo de Vugizo, y que los civiles murieron en medio del fuego cruzado con los cuerpos de seguridad congoleños. Los incidentes se producen después de que RED-Tabara lanzara en septiembre el primer ataque en suelo burundés desde 2021, cuando lanzaron diversos ataques, entre ellos al aeropuerto de Bujumbura. Desde entonces solo habían llevado a cabo acciones armadas en la provincia congoleña de Kivu Sur. La violencia provocó nuevas tensiones con Rwanda después de meses de mejora de las relaciones entre ambos países. El presidente burundés Évariste Ndayishimiye acusó el 29 de diciembre a Kigali de financiar y entrenar al grupo rebelde, lo que Kigali negó, y posteriormente decidió nuevamente **cerrar sus fronteras** con el país vecino. En paralelo, persistieron las acusaciones de que **tropas burundesas habían estado luchando contra el grupo armado M23**, respaldado por Rwanda, en RDC, con el apoyo del Ejército congolés y de las insurgencias congoleñas, en lugar de respetar el mandato de la misión de la Comunidad de África Oriental (EAC). El mandato de la misión compuesta por tropas de Uganda, Kenya, Burundi y Sudán del Sur, desplegadas a finales de 2022, era recuperar las posiciones que anteriormente ocupaban los rebeldes del M23 tras derrotar a los soldados de las FARDC y establecer una zona de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos entre el M23 y las FARDC. Además de rechazar estas afirmaciones, el **contingente burundés acusó al M23 de bloquear el acceso** de suministros a la base de la EAC en Kitchanga y Mweso (territorio de Masisi, Kivu Norte). El 11 de diciembre, el Ejército informó que todos los soldados del contingente burundés desplegados en el este de RDC como parte de la fuerza regional habían regresado a Burundi después de que terminara el mandato de la fuerza tras la decisión del Gobierno congolés de no renovar la presencia de la misión por no combatir al M23 y por las críticas de la población civil de inacción ante las acciones del M23. El mismo día, el Ejército se negó a comentar sobre las acusaciones de que se habían desplegado tropas burundesas en RDC como parte de un acuerdo bilateral entre Kinshasa y Gitega, incluidos varios relatos de soldados burundeses vistiendo uniforme del Ejército congolés y combatiendo a los rebeldes del M23 respaldados por Rwanda.

CHAD

La aprobación de la Constitución en un referéndum impulsado por la Junta Militar permitirá la elección del presidente de la Junta, Mahamat Déby, en los comicios de 2024

La nueva Constitución, elaborada bajo la tutela de la Junta Militar, fue aprobada en el referéndum celebrado

el 17 de diciembre en un clima de baja participación sobre todo en las principales ciudades y en particular el sur del país. La Comisión Electoral dictaminó el 24 de diciembre que la Constitución contó con el apoyo del 86% de los votos, con una participación del 63,75%. Diversas **figuras de la oposición y de la sociedad civil boicotearon el referéndum** y continuaron denunciando que el proyecto de Constitución, que marca el proceso de retorno al Gobierno civil, se centraba en un Estado unitario en detrimento del federal; así como la falta de participación de los principales actores políticos y la rapidez en la elaboración del censo, que no abarcó a todo el electorado, especialmente en las provincias del sur. Según la oposición, este referéndum constitucional pretendía reforzar los poderes del presidente, legitimar un Estado más centralista y, por consiguiente, el proceso de transición iniciado con el golpe de Estado cometido en abril de 2021 al facilitar que el líder de la Junta Militar, Mahamat Déby, pueda presentarse a las elecciones que deberán celebrarse en 2024. Figuras como el antiguo primer ministro Pahimi Padacké y el antiguo ministro Yaya Dillo cuestionaron los resultados antes de que el Tribunal Supremo los validara el 28 de diciembre.

La aprobación de la nueva Constitución comportó la salida del Gobierno de transición liderado por Saleh Kebzabo, y el nombramiento del antiguo líder opositor **Succès Masra el 2 de enero de 2024 como nuevo primer ministro**. Masra había retornado el 3 de noviembre después de un año en el exilio, donde había vivido desde octubre de 2022 tras la represión a la movilización civil que causó decenas de víctimas mortales –alrededor de 300, según la oposición. El acuerdo para su regreso, facilitado por la CEEAC, se alcanzó en Kinshasa e incluye una amnistía para todos los actores militares y civiles involucrados en los actos violentos del 20 de octubre de 2022, y el compromiso de Masra de apoyar el proceso de transición y promover la reconciliación. El 5 de noviembre, las autoridades liberaron a 72 miembros del partido de Masra, Les Transformateurs, que habían estado detenidos desde 2022. El 19 de noviembre, Masra se dirigió a cientos de seguidores en la capital, N'Djamena, e instó a la reconciliación con los gobernantes militares. El movimiento de la plataforma opositora civil Wakit Tama se negó a reconocer la amnistía y el líder del partido Les Démocrates rechazó el acuerdo e instó a que se hiciera justicia para las víctimas de la represión policial de 2022. A pesar de las amnistías e indultos, numerosos opositores seguían encarcelados como consecuencia de las movilizaciones de octubre de 2022. En este sentido, la **aceptación de Masra del cargo generó opiniones encontradas** en sectores opositores y de la sociedad civil.

En el plano regional, cabe destacar que se deterioraron las relaciones bilaterales entre Chad y Sudán por acusaciones del Ejército de Sudán y de su ministro de Exteriores de que **Chad estuviera facilitando que EAU pudiera dar apoyo al grupo paramilitar** sudanés Rapid Support Forces. En paralelo, en el marco de la disolución de la misión de la ONU en Malí (MINUSMA), Chad llevó a cabo el retorno de su contingente en la misión. **Mauritania y Chad**, los dos

últimos miembros de la misión G5-Sahel, alianza creada en 2014 para hacer frente al yihadismo y otros desafíos en la subregión, anunciaron su disolución el 6 de diciembre, tras el anuncio de la retirada de Níger y de Burkina Faso. La **grave situación que atraviesa Chad** y los intentos del nuevo régimen chadiano de afianzarse en el poder mediante las urnas, la cooptación de líderes opositores y las armas –en agosto el régimen reinició la ofensiva militar en Tibesti (norte) junto al Ejército Nacional de Libia contra el FACT, **grupo que mantenía un alto el fuego unilateral desde abril de 2021**– con el beneplácito de la comunidad internacional, no auguran un reflejo positivo en procesos similares a Chad, como Malí, Guinea, Burkina Faso o incluso Sudán.

MALÍ

Se rompe el Acuerdo de Paz de Argel de 2015 y se reinician los enfrentamientos entre los grupos árabe-tuareg signatarios y el Ejército maliense en el norte del país

En los últimos meses se han producido múltiples enfrentamientos armados en el norte de Malí entre el Gobierno de Malí y los grupos armados árabe-tuareg organizados en la coalición Marco Estratégico Permanente (CSP por sus siglas en francés) –que reúne a los grupos signatarios del Acuerdo de Argel de 2015, tanto a la CMA como a la Plataforma. Este hecho supone el reinicio del conflicto armado que tuvo su origen a finales de 2012 y la ruptura de la implementación del Acuerdo de Paz **tras ocho años de implementación**. Las tensiones entre las partes signatarias del acuerdo de paz habían comenzado desde la llegada al poder de la Junta militar tras el golpe de Estado de mayo de 2021. A finales de diciembre de 2022 los grupos armados habían anunciado que suspendían su participación en el Acuerdo de Argel. Si bien durante el 2023 se pusieron en marcha diferentes iniciativas para retomar la implementación del acuerdo de paz lideradas por Argel, estas resultaron infructuosas. A mediados de año, el anuncio oficial de la retirada de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el país (MINUSMA) generó duras críticas por parte del CSP, advirtiendo de los graves riesgos para la paz que provocaría. A partir de ese momento, la retirada de la MINUSMA generó disputas por el control de las bases que hasta la fecha utilizaba la misión de la ONU, **produciendo diferentes enfrentamientos armados entre las partes** por el control de la ciudad de Anefis (Kidal) y de las bases militares en Ber (Tombuctú), Aguelhok, Tessalit y Kidal (Kidal). Estos hechos provocaron que el 11 de septiembre la CMA comunicase oficialmente que se consideraba “en guerra” con Bamako.

En noviembre, el Ejército, juntamente con el grupo paramilitar ruso Wagner, tomó la ciudad estratégica de Kidal, base del CSP, quien denunció que la presencia del Ejército en la región representaba una vulneración del acuerdo de paz que les otorga control allí. Posteriormente, el 20 de diciembre el Ejército recuperó también el control

de ciudad de Aguelhok, que tras la salida de la MINUSMA había quedado bajo control de la CSP, lo que provocó un bloqueo de las carreteras que hacia las principales ciudades del norte de Menaka, Kidal, Gao, Tombuctú y Taoudeni por parte del CSP. Este reinicio de las hostilidades en el norte de Malí amenaza con recrudecer el conflicto armado, no solo en Malí, sino en toda la región de la triple frontera que comparte Malí, Burkina Faso y Níger.

Asimismo, el deterioro de la situación de seguridad entre los firmantes del acuerdo de paz está motivando múltiples ataques de las organizaciones yihadistas en el norte del país, el **Estado Islámico en la provincia del Sahel (IS Sahel)** y el **Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM)**, afiliado a Al Qaeda, cuya presencia en la zona era residual. Estas organizaciones están tratando de beneficiarse del nuevo escenario de inestabilidad, así como de la retirada de la fuerza francesa Barkhane y de la MINUSMA, para tratar de volver a consolidar, ampliar y afianzar sus zonas de influencia en el norte.

RDC

Acusaciones de fraude en un clima de violencia política con el trasfondo de la guerra en el este amenazaron con desestabilizar aún más el país

El 20 de diciembre se celebraron las elecciones generales en la República Democrática del Congo (RDC), en las que el **presidente Félix Tshisekedi fue reelegido** para un segundo mandato tras haber conseguido más del 73% de los votos con un 43% de la participación, según la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), resultado ratificado por el Tribunal Constitucional. Las elecciones se vieron plagadas de irregularidades y **varios de los principales candidatos pidieron una repetición** y denunciaron la existencia de fraude, entre ellos Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege y el partido del ex presidente Joseph Kabila. Problemas logísticos, acusaciones de fraude, recuento opaco de votos, equipos defectuosos y retrasos en la entrega del material electoral obligaron a una extensión no programada de las elecciones, que los líderes de la oposición dijeron que era inconstitucional.

La Iglesias Católica y Protestante de RDC, que actuaron como observadores locales de los comicios, informaron que los numerosos casos de irregularidades detectados podrían afectar a la integridad de los resultados. El Gobierno descartó la repetición electoral y prohibió las protestas de la oposición en los días posteriores a los comicios. En paralelo, los **resultados provisionales de las elecciones legislativas** fueron publicados por la CENI el 14 de enero y dieron como ganador al partido de Félix Tshisekedi, Unión para la Democracia y el Progreso Social (UDPS), que obtuvo 66 de los 500 escaños, incrementando el resultado obtenido en 2018 (35 escaños). Se espera que pueda configurar el nuevo Gobierno junto al resto de los partidos aliados de la coalición Union Sacré, que en el Parlamento saliente controlaba 390 escaños. Algunos

aliados de Tshisekedi como el presidente del Senado Modeste Bahati Lukwebo, el ministro de Defensa Jean Pierre Bemba, y el ministro de Economía Vital Kamerhe, obtuvieron 35, 17 y 32 escaños, respectivamente. Esta grave situación postelectoral alimentó una disputa que amenaza con desestabilizar aún más a un país del tamaño de Europa Occidental y que es el principal productor de cobalto y de otras materias primas de interés estratégico.

En el período previo a las elecciones, grupos de derechos humanos habían acusado a las autoridades de restringir el espacio político, y la **ONU documentó violencia contra actores de la sociedad civil**. Desde octubre, organizaciones como **Human Rights Watch** alertaron de enfrentamientos en todo el país entre partidarios de partidos políticos rivales que resultaron en agresiones y violencia sexual. Dichos incidentes de violencia política persistieron tras la celebración de las elecciones. Los partidarios del gobernante partido UDPS se vieron implicados en amenazas y ataques contra líderes opositores y periodistas. Los partidarios de la oposición también estuvieron implicados en actos de violencia. El presidente Félix Tshisekedi era el favorito en la carrera electoral, con la oposición fragmentada. Asumió el cargo en 2019 después de elecciones disputadas que, según diversas fuentes, **podrían haber sido ganadas por otro candidato**, Martin Fayulu. Los combates en el este del país también impidieron que 1,5 millones de personas desplazadas internas se registraran para votar.

En este sentido, **la seguridad en el este se deterioró durante el mandato de Tshisekedi** y actualmente hay una cifra récord de **siete millones de personas desplazadas internamente**. Aunque entre abril y octubre se redujeron los enfrentamientos entre el Gobierno y el grupo M23, en paralelo al despliegue de la misión militar de la organización regional Comunidad de Estados de África Oriental (EAC), este grupo continuó combatiendo contra grupos armados locales progubernamentales en Kivu Norte. En octubre se intensificó la ofensiva del M23 en Kivu Norte. Esta ofensiva se sumó al clima general de violencia electoral. Durante este periodo se celebraron diferentes iniciativas regionales para intentar relanzar las negociaciones de paz y se incrementó la presión internacional sobre Rwanda, aunque los procesos de Luanda y de Nairobi iniciados durante 2022 permanecieron estancados. EEUU intentó promover un alto el fuego durante los comicios, que fue utilizado por el M23 para reforzar sus posiciones alrededor de Sake, con apoyo de Rwanda. La misión de la EAC completó su retirada del país el 21 de diciembre, a petición del Gobierno debido a su inoperancia.

Días antes de la celebración de los comicios se creó en Kenya una **nueva coalición político militar, Alliance Fleuve Congo**, liderada por el antiguo presidente de la CENI, Corneille Nangaa, en alianza con el grupo armado M23 y otros grupos del este del país, cuya intención, en un comunicado lanzado por el propio Nangaa desde el feudo del M23 en Rutshuru (Kivu Norte), era derrocar el Gobierno de Tshisekedi. Kinshasa llamó a consultas al embajador de Kenya en RDC y retiró a su embajador en Nairobi en señal de protesta, ya que Kenya formaba parte

de la misión de la EAC y de los esfuerzos mediadores regionales.

SOMALIA – SOMALILANDIA – ETIOPÍA

El acuerdo entre Etiopía y Somalilandia sobre el reconocimiento de la región desestabiliza el Cuerno de África y frustra el diálogo entre Somalia y Somalilandia

Etiopía y Somalilandia anunciaron el 1 de enero la firma de un memorando de entendimiento entre ellos, acuerdo que daría a Etiopía, que no tiene acceso al mar, la oportunidad de obtener una base naval permanente y servicio marítimo comercial en el golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento por una extensión de 20 kilómetros de costa durante un periodo de cincuenta años, según detallaron los Gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de Somalilandia, Muse Bihi Abdi, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente. Addis Abeba matizó que todavía debía evaluar esa petición y prometió “una evaluación en profundidad para adoptar una posición respecto a los esfuerzos de Somalilandia por ser reconocida oficialmente”. El acuerdo gira en torno al puerto de Berbera, que recientemente fue ampliado por la compañía de logística portuaria DP World, con base en EAU. Etiopía históricamente ha buscado diversificar su acceso al mar, ya que el 95% de su comercio se realiza a través de Djibouti. El acuerdo también incluye arrendar terreno de Somalilandia para construir una base naval. A cambio, Somalilandia recibiría el valor equivalente en forma de acciones de la aerolínea Ethiopian Airlines. En un comunicado hecho público en la red social X (antiguo Twitter), la oficina del primer ministro etíope celebró el acuerdo pero no hizo ninguna mención al reconocimiento, solo un compromiso a avanzar en intereses mutuos sobre la base de reciprocidad.

Este anuncio provocó una nueva crisis diplomática entre Somalia, Somalilandia y Etiopía que adquirió dimensiones regionales, por la política de alianzas regionales de

Etiopía y Somalia. Somalia declaró nulo el acuerdo e incluso amenazó a Etiopía con iniciar una guerra si fuera necesario para preservar su soberanía nacional, ya que Somalia continúa considerando a Somalilandia como parte de Somalia, a pesar de su independencia de facto en 1991, sin reconocimiento internacional. Se convocaron manifestaciones en Somalia, y en la propia Somalilandia, el acuerdo fue recibido con protestas y la dimisión del ministro de Defensa. EEUU, la UE, la UA, la IGAD y la Liga Árabe, entre otros, hicieron un llamamiento al diálogo y a reducir la tensión. La organización regional IGAD convocó de urgencia una reunión extraordinaria el 18 de enero para abordar las tensiones diplomáticas, a la que Etiopía anunció que no podría asistir por solapamiento con otra cumbre. La reunión convocada por Djibouti, que ocupa la presidencia rotatoria de la IGAD, coincidía con la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Según diversos análisis, aunque es improbable una confrontación entre ambos países, debido al poder militar etíope frente al somalí, este acuerdo puede dañar gravemente las relaciones entre ambos y tener consecuencias en la guerra contra el grupo islamista somalí al-Shabaab, ya que un clima de rechazo hacia Etiopía en Somalia podría derivar en presiones hacia la presencia etíope en Somalia que acabasen con su retirada de la misión de la UA en el país, ATMIS. Etiopía es uno de los principales países contribuyentes de tropas en la misión de la UA en Somalia.

Este acuerdo dio al traste con los esfuerzos diplomáticos que se habían estado construyendo en los últimos meses, facilitados por Turquía y Noruega, entre otros, con el objetivo de abrir un espacio de diálogo y reconciliación entre Somalia y Somalilandia, bloqueado en los últimos años, y que habían culminado con una histórica reunión entre los presidentes de Somalia y Somalilandia entre el 28 y el 29 de diciembre auspiciada por Djibouti. Tras la toma de posesión de Hassan Sheikh Mohamud en mayo de 2022 como presidente de Somalia, este manifestó su voluntad de contribuir a la reconciliación entre Somalia y la autoproclamada República de Somalilandia y a su incorporación en el seno de la federación.

AMÉRICA

COLOMBIA: El Gobierno y el ELN logran avanzar en las negociaciones

HAÍTÍ: El Consejo de Seguridad autoriza una misión multinacional para hacer frente a la crisis de inseguridad

VENEZUELA – GUYANA: Se incrementa la tensión política y militar en la región tras la celebración en Venezuela de un referéndum sobre la anexión del Esequibo, una región en disputa

COLOMBIA

El Gobierno y el ELN logran avanzar en las negociaciones y superar la grave crisis provocada por los secuestros del grupo armado

Después de varias semanas de crisis en el proceso de conversaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN, finalmente se celebró el quinto ciclo de negociaciones en México en el que se alcanzaron algunos acuerdos relevantes para el proceso. En los meses previos se habían celebrado tres ciclos más, en México, en Cuba y en Venezuela, consolidando el proceso iniciado en 2022. No obstante, en octubre el proceso atravesó su más grave crisis, cuando el grupo armado secuestró a los padres del futbolista internacional colombiano Luis Díaz. Si bien su madre fue liberada en las horas posteriores a su captura, el secuestro durante 12 días más del padre del futbolista provocó una crisis en las negociaciones, llegando a poner en peligro su continuidad. El propio presidente colombiano, **Gustavo Petro**, afirmó que el secuestro era un hecho que iba en contra del proceso de paz. La cuestión del secuestro es uno de los aspectos más sensibles en el proceso con el ELN. En los últimos años se han multiplicado las exigencias al grupo armado para que ponga fin a esta grave violación de los derechos humanos. La puesta en libertad de Luis Manuel Díaz dio paso a la reanudación de las negociaciones y a que **las partes lograran pactar** algunas cuestiones muy significativas para el proceso. La más relevante de ellas, y especialmente después del episodio de crisis previo, fue el **acuerdo para poner fin a los secuestros** con fines de extorsión, que el ELN definió como retenciones con fines económicos. Se trataba de la primera vez que el grupo armado asumía un compromiso de estas características en el marco de unas negociaciones de paz, lo que supuso un gran espaldarazo para las negociaciones después de haber atravesado una de las mayores crisis. Además, en el quinto ciclo se profundizó en algunos de los elementos que habían formado parte de las agendas de los encuentros previos, como la conformación de ocho zonas críticas –denominación que reciben zonas del país afectadas por la violencia y objeto de actuaciones específicas definidas por las partes en el marco de las negociaciones de paz.

Otro de los temas esenciales del ciclo de conversaciones fue la cuestión del alto el fuego. Se logró un acuerdo que tenía como objetivo lograr establecer condiciones para que este alto el fuego se pudiera prorrogar más allá de la fecha inicialmente acordada de vencimiento para el 29 de enero de 2024. El alto el fuego, que fue acordado en el tercer ciclo de negociaciones, estaba vigente desde el 3 de agosto. En paralelo también se pactó trabajar para prorrogar el trabajo del Mecanismo de Verdad y

Verificación que debe supervisar el cumplimiento del alto el fuego. El cierre del quinto ciclo con acuerdo entre las partes permitirá dar continuidad al proceso y está previsto que se retome el diálogo en el sexto ciclo, cuyo inicio estaba previsto para enero en Cuba. Cabe señalar que el presidente Petro apuntó a la posibilidad de un próximo ciclo de negociaciones en El Vaticano, dado el papel que la iglesia católica juega de apoyo al diálogo con el ELN. Por otra parte, el Gobierno llevó a cabo varios cambios en su delegación negociadora, el más relevante de ellos, la designación de **Vera Grabe** al frente de dicha delegación. Se trata la primera vez en un proceso de paz en Colombia que una mujer encabeza una delegación negociadora. El nombramiento de Grabe se produjo en sustitución de Otty Patiño que fue designado como Alto Comisionado para la Paz tras la destitución de Danilo Rueda de este cargo.



Foto: Misión ONU Colombia

HAÍTÍ

El Consejo de Seguridad autoriza una misión multinacional para hacer frente a la crisis de inseguridad en Haití

A principios de octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU **autorizó la creación de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad** (MSS, por sus siglas en inglés) con el objetivo principal de apoyar a la Policía Nacional Haitiana a restaurar la seguridad, proteger infraestructuras y rutas de comunicación vitales para el país y crear las condiciones propicias para la celebración de elecciones. Además, la misión también deberá proteger los envíos de ayuda humanitaria y apoyar los esfuerzos del Gobierno y varias agencias de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de armas. Aunque fue el Consejo de Seguridad de la ONU el que aprobó la resolución que crea la MSS para un período de doce meses bajo el

capítulo VII, esta no es una misión de Naciones Unidas, sino una coalición ad hoc de países liderada por Kenia y se financiará a través de contribuciones voluntarias a través de un fondo fiduciario de Naciones Unidas. A petición del Gobierno haitiano, Naciones Unidas llevaba más de un año discutiendo formatos de intervención para hacer frente al agravamiento de la situación de seguridad. El secretario general de la ONU había hecho varios llamamientos en ese sentido, y el propio Consejo de Seguridad había previamente establecido en 2022 un régimen de sanciones y un embargo de armas que prorrogó en 2023. Además, países como EEUU y Canadá habían enviado equipamiento militar a la Policía para reforzar sus capacidades.

Aunque todavía hay numerosos aspectos sobre el despliegue de la misión por concretar (países contribuyentes, número total de efectivos de la misión, cuestiones logísticas y de coordinación interna), se estima que a principios de 2024 debería desplegarse un primer contingente de la MSS. A pesar de que, según varios análisis, existía un consenso generalizado entre la comunidad internacional sobre la necesidad de algún tipo de intervención internacional en el país, y a pesar del pleno apoyo del Gobierno haitiano a la MSS, existen algunos restos a los que esta deberá hacer frente.

En primer lugar, a principios de 2024, más de tres meses después de la aprobación de la resolución que creaba a la MSS, todavía había serias dudas sobre algunas cuestiones operativas de la misión. Algunos análisis sostienen que la MSS estará conformada por entre 2.500 y 5.000 efectivos de una docena de países, pero algunos de los países caribeños (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados o Belice) que habían expresado su compromiso con la misión todavía no habían concretado su contribución a la misma. Incluso la participación de Kenia, el país que lidera la MSS y en el que la oposición al Gobierno cuestionó tal despliegue de tropas en el extranjero, estaba pendiente de una resolución judicial de la Corte Suprema.

El reto más importante al que deberá hacer frente la MSS es la **acuciante situación de violencia que sufre el país**. Aún si tal situación se agudizó claramente tras el asesinato del ex presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, en 2023 (y especialmente en la segunda mitad del año) se incrementaron claramente los hechos de violencia. A modo de ejemplo, la tasa de homicidios de 2023 fue superior al doble respecto de la de 2022, en la que ya había experimentado un importante aumento respecto de los años anteriores. De igual modo, el número de secuestros (más de 3.000 en todo el año) experimentó un crecimiento sin precedentes. A finales de 2023, unos dos millones de personas vivían en áreas controladas por las bandas criminales y más de 200.000 personas se habían visto obligadas a abandonar sus casas a causa de la violencia. Según Naciones Unidas, las bandas de crimen organizado –más de 300– **controlan más de la mitad de la capital**, así como las principales rutas de conexión de Puerto Príncipe con el resto del país y algunas infraestructuras clave para la prestación de servicios

básicos. En el ámbito humanitario, Naciones Unidas señaló que la mitad de la población haitiana, incluyendo tres millones de menores, necesitaba algún tipo de ayuda y advirtió que al finalizar el 2023 solamente había recibido un 25% de los fondos necesarios para hacer frente a las necesidades humanitarias del país. La situación de violencia y de enfrentamientos entre las dos principales coaliciones de organizaciones criminales (llamadas G9 y GPèp) se incrementó notablemente en la segunda mitad del año, especialmente tras la muerte de uno de los líderes y fundadores de la coalición G9 a mediados de noviembre. También cabe destacar la proliferación en los últimos años de grupos civiles y milicias de autodefensa en las principales zonas urbanas del país, y especialmente la creación del grupo Bwa Kale en abril de 2023 para prevenir la implantación de las bandas criminales en determinados barrios de la capital. Según datos oficiales, solamente entre abril y septiembre de 2023, se habrían registrado **388 linchamientos de presuntos miembros de bandas criminales**.

VENEZUELA – GUYANA

Se incrementa la tensión política y militar en la región tras la celebración en Venezuela de un referéndum sobre la anexión del Esequibo, una región en disputa

En el último trimestre del 2023, especialmente a partir de diciembre, se produjo una importante crisis diplomática y escalada militar en América del Sur a raíz de la decisión del Gobierno de Venezuela de **convocar un referéndum sobre la anexión del Esequibo** (un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados históricamente reivindicado por Venezuela pero que está bajo el control y administración de Guyana) y de poner en práctica determinadas medidas para hacer efectivos los resultados de la consulta. Según Caracas, la participación en el referéndum celebrado el 3 de diciembre fue de alrededor del 50%, y el 95% de las personas que votaron dieron su apoyo a las cinco preguntas planteadas en el referéndum acerca, entre otras, del no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial; la creación del estado Guayana Esequiba, o el otorgamiento de la ciudadanía a la población de ese territorio. Dos días después del referéndum, Maduro **anunció la incorporación del Esequibo al mapa oficial de Venezuela**, el inicio de un censo y la expedición de cédulas de identidad en la región, y también pidió al Parlamento que empezara el trámite legislativo para convertir a la Guayana Esequiba en un nuevo estado de la república. También anunció la creación de una Zona de Defensa Integral, ordenó la realización de un mapa de exploración y explotación de los recursos y la concesión de licencias para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en la Guayana Esequiba. Además, concedió un período de tres meses para que las compañías petroleras autorizadas por Guyana a operar en aguas en disputa pusieran fin a sus actividades. En el plano militar, Venezuela y Guyana pusieron en estado de alerta a sus ejércitos y Brasil y Surinam movilizaron a sus Fuerzas Armadas en sus

respectivas fronteras. Por su parte, EEUU llevó a cabo maniobras militares conjuntas con Guyana solamente tres días después del referéndum y Reino Unido, antigua potencia colonial en la región, envió un buque de guerra a las costas de Guyana, que retiró poco después de que Venezuela llevara a cabo importantes maniobras militares en el Atlántico.

A mediados de diciembre, **los presidentes de Venezuela y Guyana se reunieron en San Vicente y las Granadinas** a instancias de la CELAC, CARICOM y el presidente de Brasil, con la observación de Naciones Unidas, y suscribieron una declaración conjunta con varios compromisos – entre ellos, no amenazarse ni utilizar la fuerza; crear una comisión conjunta con los ministros de exteriores de los dos Estados; continuar el diálogo sobre el contencioso; o reunirse nuevamente en Brasil en los siguientes tres meses. Aunque en los días posteriores a la cumbre se rebajó la retórica belicista de las últimas semanas, tanto Maduro como Ali siguieron manteniéndose firmes en sus posturas. Ali, por ejemplo, señaló que el estatus del Esequibo no es objeto de discusión o negociación, y que el contencioso territorial debe resolverse exclusivamente en el seno de la Corte Internacional de Justicia, organismo al que Caracas deniega legitimidad y jurisdicción para resolver el contencioso. Además, Ali declaró que su país tenía todo el derecho a explotar recursos, expedir licencias y otorgar concesiones en su espacio soberano.

A pesar de la gravedad de los acontecimientos, y de la inestabilidad regional que pueden provocar, algunos análisis han sugerido que la escalada de la situación responde principalmente a factores de coyuntura política doméstica en Venezuela. Según estas voces, el contencioso entre ambos países se remonta a décadas atrás, y tanto en los Gobiernos de Hugo Chávez como en los primeros años de la administración de Maduro no fue un eje importante de la política exterior de Venezuela. Según estas voces, la convocatoria del referéndum podría interpretarse como una estrategia de movilización popular y electoral ante la perspectiva –no confirmada oficialmente– de que los

comicios presidenciales pudieran celebrarse en 2024. Según estos análisis, la reivindicación del Esequibo es una cuestión que suscita un apoyo popular significativo, tal y como lo demuestran varias encuestas y los resultados oficiales del referéndum. Caracas hizo público que alrededor de 10,5 millones de personas votaron en la consulta, aunque algunos análisis sospechan de tales cifras.

Por otra parte, la celebración del referéndum se produjo pocos días después de que se conocieran los **resultados de las elecciones primarias** que organizó la oposición para elegir a la persona que concurrirá a los comicios presidenciales de 2024. Según la oposición, unos 2,4 millones de personas participaron en dicho proceso, en el que María Corina Machado –inhabilitada por 15 años para concurrir a cargos públicos– logró el 93% de los votos. Sin embargo, el Gobierno consideró que el proceso había sido fraudulento y, a finales de octubre, la Corte Suprema invalidó los resultados de las primarias. Según los análisis que interpretan a partir de factores internos la escalada del conflicto con Guyana, el oficialismo habría utilizado también la convocatoria del referéndum para desviar la atención que tales primarias lograron y también para intentar dividir y debilitar a la oposición. Cabe recordar que en octubre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria (que mantienen una negociación con la facilitación de Noruega) habían acordado en Barbados una defensa conjunta de la Guayana Esequiba y que algunos líderes opositores (como los ex candidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales) se manifestaron a favor de la celebración del referéndum. Sin embargo, otros se mostraron en contra de tal iniciativa. Machado, por ejemplo, solicitó la suspensión del referéndum y pidió a la población que no se dejara instrumentalizar por el Gobierno. Dos días después del referéndum, el fiscal general de Venezuela **dictó una orden de arresto** contra 13 personas (incluyendo a destacados líderes en el extranjero, como Juan Guaidó, Julio Borges o Leopoldo López, y también a tres personas del equipo de Machado) acusados de traición a la patria por participar en una conspiración nacional e internacional para boicotear el referéndum.

ASIA

BANGLADESH: Se agrava la crisis política con el boicot de la oposición a las elecciones y las protestas de los trabajadores del sector textil

CHINA – TAIWÁN: Escala la tensión a raíz de la celebración de elecciones presidenciales en Taiwán

FILIPINAS: Tras un período de seis años, el Gobierno y el NDF acuerdan reanudar las negociaciones

MYANMAR: Escala la violencia como consecuencia de la mayor operación de la insurgencia étnica contra el régimen militar

PAKISTÁN: Se agrava la violencia en el país y escala la tensión internacional con Irán

BANGLADESH

Se agrava la crisis política con el boicot de la oposición a las elecciones y las protestas de los trabajadores del sector textil

La crisis política que atraviesa Bangladesh en los últimos años **se agravó** en los meses previos a la celebración de las **elecciones generales** que tuvieron lugar el 7 de enero. La primera ministra y dirigente del partido Awami League, Sheikh Hasina, revalidó su cuarto mandato consecutivo –cinco mandatos en total–, al obtener 225 de los 300 escaños en disputa. Las elecciones fueron boicoteadas por el principal partido de la oposición, el Bangladesh Nationalist Party (BNP) y la participación fue del 40%. Esta participación fue menor que en anteriores elecciones, en 2018 había sido del 80%. La baja participación y la intensificación de las protestas abrieron interrogantes sobre el futuro político inmediato del país y la consolidación de la deriva autoritaria de los últimos años, así como de la violencia política y social.

En los meses previos a los comicios se produjeron múltiples manifestaciones y movilizaciones sociales convocadas por la oposición. En respuesta a esta movilización, el Gobierno intensificó la represión y 25.000 miembros del BNP fueron detenidos desde finales de octubre. Al menos 1.600 personas, incluyendo integrantes y dirigentes del BNP, fueron condenados. Los principales líderes del partido se hallan en el exilio o detenidos. Durante todo 2023 las elecciones habían estado en el centro de las disputas políticas en el país, con llamamientos repetidos por parte de la oposición a recuperar el sistema de gobierno interno en los meses previos a la celebración de la votación. El sistema de Gobierno interino en el periodo preelectoral fue eliminado en 2011 y desde entonces el BNP aboga por su retorno. Sin embargo, a partir del mes de octubre se intensificaron las protestas y la represión. Decenas de miles de personas participaron en manifestaciones en los últimos días de octubre y al menos cuatro personas –incluyendo un policía– murieron como consecuencia de la respuesta de las fuerzas de seguridad y de los disturbios durante las protestas. Aunque durante los meses previos algunos medios apuntaron a la posibilidad de diálogo y hubo llamamientos por parte de actores internacionales, como la Embajada de EEUU, no se produjeron iniciativas ni avances en este sentido.

En paralelo a las protestas políticas se produjeron también **movilizaciones de los trabajadores del sector textil**, exigiendo mejoras salariales. El textil representa más del

80% de las exportaciones del país asiático, siendo uno de los principales proveedores a nivel internacional de los mercados occidentales y es el motor de la economía del país. Las condiciones laborales de los trabajadores del textil bangladeshí han sido repetidamente denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Las protestas de los últimos meses lograron paralizar la industria en varias ocasiones y en varios momentos se produjeron enfrentamientos violentos entre manifestantes y policía. El salario mínimo mensual en el textil es de 70 euros y el gobierno anunció subidas del 50%, que los sindicatos consideraron insuficientes y exigieron que se triplique. Al menos cuatro trabajadores murieron y decenas resultaron heridos en las protestas, en las que también se produjeron cortes de carreteras. El Gobierno señaló que las protestas laborales habían sido instigadas por la oposición para obtener réditos políticos.

CHINA – TAIWÁN

Escala la tensión a raíz de la celebración de elecciones presidenciales en Taiwán

En el último trimestre del 2023 y principios de 2024 se incrementó notablemente la tensión política entre China y Taiwán a raíz de las **elecciones celebradas en Taiwán** a mediados de enero, en las que el candidato del partido gubernamental Partido Progresista por la Democracia, Lai Ching-te, se impuso con el 40% de los votos a los candidatos de los partidos opositores Kuomintang (33%) y Partido Popular de Taiwán (26%). A pesar de que la victoria de Lai supone el tercer mandato consecutivo del DPP, dicha formación obtuvo 51 de los 113 escaños y perdió la mayoría que ostentaba hasta el momento, de modo que el Gobierno tendrá que buscar apoyos parlamentarios. La UE y varios Gobiernos, entre ellos el de EEUU, Canadá o el Reino Unido, felicitaron al vencedor de los comicios y al pueblo de Taiwán por la fortaleza de su sistema democrático. El secretario del Departamento de Estado de EEUU, Anthony Blinken, felicitó a Lai y declaró que esperaba trabajar con él y construir una relación bilateral no oficial. Beijing presentó una queja formal por tales declaraciones (por considerar que se trata de una violación del compromiso de Washington de no entablar contactos oficiales con Taiwán) y **se mostró crítico** con la visita a la isla de una delegación bipartidista de ex altos cargos gubernamentales de EEUU, señalando que los comicios en Taiwán son un asunto interno de China y que la cuestión acerca de la soberanía de Taiwán es la principal línea roja que no debe cruzar EEUU en

sus relaciones con China. Tras conocerse los resultados, el presidente estadounidense, Joe Biden, declaró que su Gobierno no apoya la independencia de Taiwán y reafirmó el principio auspiciado por Beijing de Una Sola China. Por otra parte, el Gobierno chino declaró que el resultado de las elecciones no hace variar el hecho de que Taiwán, a la que considera una provincia rebelde desde 1949, es una parte innegociable de China.

Tras su victoria, Lai Ching-te declaró estar dispuesto a salvaguardar a Taiwán de las amenazas e intimidaciones de China, pero a la vez dijo que su responsabilidad era mantener la estabilidad y la paz en el Estrecho de Taiwán, **se comprometió a dialogar con el Gobierno chino** bajo los principios de dignidad y paridad y mostró su intención de reducir los niveles de confrontación con Beijing. En épocas anteriores, Lai Ching-te se había mostrado abierta y públicamente a favor de la independencia de Taiwán, y durante los meses inmediatamente anteriores a las elecciones numerosos altos cargos del Gobierno chino criticaron duramente a Lai Ching-te y le tildaron de instigador de la guerra entre China y Taiwán. Sin embargo, varios medios señalaron que el presidente electo de Taiwán habría trasladado a sus colaboradores más cercanos y a sus aliados tradicionales, como EEUU, su intención de dar continuidad a la línea moderada de su antecesora en el cargo, Tsai Ing-wen, que desde su llegada al poder en 2016 priorizó el estatus quo (ni reunificación con China ni independencia). Lai señaló que Taiwán ya es un país soberano e independiente, de modo que **no existe ni la necesidad ni el plan de declarar la independencia**. Sin embargo, algunos medios recuerdan que cuando Tsai Ing-wen accedió al cargo de presidenta en 2016 el Gobierno chino cortó las comunicaciones con Taipei e intensificó su campaña para aislar a Taiwán en el plano internacional, y anticipan que en los siguientes meses pueda producirse un incremento de la tensión entre Beijing y Taipei. Desde 2016 ha habido 10 países que han dejado de reconocer a Taiwán en favor del establecimiento de relaciones diplomáticas con China, de modo que actualmente Taiwán solamente cuenta con 12 países que le reconocen oficialmente.

Algunos medios sostienen que la tensión entre China y Taiwán está en su punto más álgido desde 1996, cuando Beijing disparó misiles frente a la costa de Taiwán coincidiendo con la celebración de las primeras elecciones democráticas de Taiwán tras el período de autoritarismo ejercido durante décadas por el Kuomintang. En esta línea, en los meses anteriores a la celebración de las elecciones, las Fuerzas Armadas de China incrementaron su presión militar sobre la isla. El 31 de diciembre, Taiwán declaró haber detectado 313 aviones militares chinos alrededor de la isla durante el mes de diciembre, de los cuales al menos 92 cruzaron la “línea media” del Estrecho –demarcación no oficial– o fueron detectados en la zona de identificación de la defensa aérea de Taiwán; Taiwán también declaró haber avistado 172 buques de la marina china en aguas circundantes a la isla. Taipei declaró que en los últimos meses las cifras de navíos o aviones chinos identificados cada mes habían sido

parecidas. Otro elemento que incrementó la tensión en el mes de diciembre fue la aprobación por parte del Senado de EEUU de una ley que permite el incremento de la cooperación militar con Taiwán y el fortalecimiento de sus capacidades de defensa. En el plano retórico, a finales de año el Gobierno chino declaró que la independencia de Taiwán significaría guerra, y Xi Jinping reiteró nuevamente la inevitabilidad histórica de la reunificación de Taiwán con China durante su discurso de fin de año.

FILIPINAS

Tras un período de seis años, el Gobierno y el NDF acuerdan reanudar las negociaciones

A finales de noviembre, el Gobierno filipino y el Frente Democrático Nacional de Filipinas –organización política que representa al Partido Comunista de Filipinas y a su brazo armado (el NPA) en las negociaciones de paz desde los años ochenta– **firmaron en Oslo un comunicado conjunto en el que se comprometían a reanudar las negociaciones** para intentar poner fin de manera dialogada y pacífica a un conflicto armado que se inició a finales de los años 60, uno de los más longevos de Asia. Tal comunicado, que se fraguó durante una serie de encuentros informales y confidenciales facilitados por el Gobierno de Noruega desde el año 2022, era relevante porque oficialmente las negociaciones habían finalizado seis años antes y porque desde entonces tanto el Gobierno de Rodrigo Duterte (2016–22) como el de Ferdinand Marcos (vigente desde 2022) habían enfatizado que la prioridad del Ejecutivo era poner al fin al conflicto a través de cauces militares. Manila no quiso concretar plazos, aunque avanzó que el inicio de las conversaciones formales seguramente se produciría en el primer trimestre de 2024. El comunicado conjunto del Gobierno y el NDF, que explicitaba las causas socioeconómicas y políticas del conflicto, fue bien valorado por ambas partes y por determinados gobiernos y organismos internacionales y generó expectativas importantes sobre una resolución dialogada del mismo porque vino precedida de una proclamación presidencial que otorgaba amnistía a los miembros del NDF, el NPA y el Partido Comunista de Filipinas –además de a otras cuatro organizaciones revolucionarias. Sin embargo, **algunos análisis advirtieron sobre algunas amenazas o retos a la resolución del conflicto** a través de una negociación entre el Gobierno y el NDF.

En primer lugar, porque existen serias incertidumbres sobre los contenidos, plazos y objetivos de la negociación. Ambas partes reconocieron que aún se están discutiendo el marco, los tiempos, la agenda y las prioridades de la negociación y que están pendientes de formarse tanto los paneles negociadores como los equipos de trabajo de carácter más técnico. El Gobierno declaró que en realidad no se trata de una reanudación de las conversaciones de paz, sino del **inicio de un nuevo proceso de negociación**. Por su parte, el NDF advirtió que el marco negociador que acuerden ambas partes debe construirse sobre la base de los acuerdos que se han firmado en las últimas décadas,

principalmente la declaración de La Haya (1992, que define el marco, los principios y la agenda de la negociación) y los acuerdos sobre garantías de seguridad e inmunidad para los negociadores del NDF (1997) y el acuerdo sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario (1998). Además, el NDF también remarcó la importancia de resolver algunas cuestiones antes del inicio de las negociaciones formales, aunque remarcando que en realidad no eran precondiciones para el diálogo: la liberación general de los presos políticos y de los llamados consultores políticos del NDF para que puedan participar en las negociaciones de paz; las garantías de seguridad para el equipo negociador del NDF; y la retirada de la calificación de terroristas al NDF y a algunos de sus destacados líderes o miembros del panel negociador.

En segundo lugar, cabe destacar que, aunque la decisión del Gobierno fue secundada por las principales instancias del Estado, tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Armadas expresaron sus matices y reservas tanto a la concesión de amnistía como a la reanudación de las negociaciones de paz. En este sentido, el Gobierno declaró que proseguirán las operaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra el NPA, que según Manila se halla muy debilitado militarmente. Cabe destacar la **oposición frontal de la vicepresidenta del país, Sara Duterte**, al comunicado conjunto entre Manila y el NDF, que calificó de “acuerdo con el diablo” y de capitulación ante terroristas y enemigos del Estado. Además de ser la vicepresidenta, tener altas cotas de popularidad entre la población y de ser la hija del expresidente Rodrigo Duterte, algunos análisis calificaron como relevante la oposición de Duterte al proceso de negociación por ser también la co-vicepresidenta del organismo que lidera la política de contrainsurgencia del país. Tanto Duterte como altos funcionarios del Estado han criticado en numerosas ocasiones la falta de sinceridad y voluntad política del NDF para resolver el conflicto a través del diálogo. En este sentido, a pesar de que el Partido Comunista de Filipinas decretó un alto de fuego de dos días con motivo de las fiestas navideñas, sectores cercanos al Gobierno expresaron su malestar por el comunicado emitido por dicho partido el 26 de diciembre con motivo del aniversario de su fundación, en el que declaraban la primacía de la lucha armada para lograr transformaciones y en el que señalaban que las conversaciones de paz eran un campo de batalla adicional para el avance de sus objetivos.

Por otra parte, otros análisis también han mostrado su escepticismo acerca del futuro del proceso de negociación porque hasta finales de noviembre, la mayor parte de las declaraciones públicas de Marcos, las Fuerzas Armadas y responsables de la política de gestión del conflicto ponían el acento en la derrota del NPA –grupo al que consideraban en fase terminal–; en la promoción de programas de desarme, desmovilización y reinserción de combatientes; el impulso de programas de desarrollo comunitario en aquellas regiones en las que históricamente el NPA tenía mayor ascendencia e influencia, y en la sustitución de las negociaciones con el NDF por la llamadas conversaciones de paz localizadas con unidades locales del NPA.

Estos análisis también recuerdan el largo historial de desencuentros, desconfianza e interrupciones del diálogo que ha habido en las negociaciones entre el Estado filipino y el NDF desde el inicio de las conversaciones entre ambas partes a mediados de los años 80.

MYANMAR

Escala la violencia como consecuencia de la mayor operación de la insurgencia étnica contra el régimen militar

El conflicto armado en Myanmar **escaló notablemente desde el mes octubre**, con epicentro en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos integrantes de la Alianza de los Tres Hermanos –conformada por el MNDAA (grupo armado kokang), el TNLA (grupo armado ta'ang) y el AA (grupo armado rakáin), en el norte del estado Shan. Desde el golpe de Estado de 2021 que devolvió el poder del país a la cúpula militar, se ha intensificado la violencia entre diferentes insurgencias étnicas enfrentadas durante décadas a las fuerzas de seguridad, a las que se unieron grupos de oposición al golpe militar. En octubre, **la Alianza lanzó la Operación 1027** (en referencia a su inicio el día 27 de octubre), que hasta el momento ha supuesto la mayor ofensiva contra las fuerzas de seguridad birmanas, logrando la captura de varias ciudades e interrumpiendo de forma notable la circulación por diferentes rutas que comunican el país con China, con un importante impacto comercial.

La ofensiva, encabezada por el MNDAA, tenía como objetivo inicial recuperar el control sobre la Zona Autónoma de Kokang y su capital Lakkain, que el grupo armado había perdido en 2009. Se trata de una zona crucial para el negocio del juego ilegal y numerosas actividades ilícitas vinculadas a estafas por internet controladas por grupos criminales. Miles de integrantes de los grupos armados participaron en la operación, con el apoyo de varios grupos de las fuerzas de defensa popular –surgidos en respuesta al golpe de Estado de 2021– llevando a cabo ataques simultáneos en diferentes emplazamientos y ante los que las fuerzas de seguridad no tuvieron capacidad suficiente de respuesta. Si bien posteriormente, se produjeron ataques aéreos en respuesta, las fuerzas insurgentes lograron capturar numerosos emplazamientos. Además, grupos armados de otras zonas del país, aprovecharon la situación de debilidad militar del régimen para iniciar operaciones en otros estados, como ataques por parte del KIO en la región Sagaing, ataques en el estado Kayah, e incluso en el estado Rakhine por parte del AA, dando lugar a la ruptura del alto el fuego informal que estaba vigente en este estado desde 2022.

Como consecuencia de la escalada de la violencia, más de 300.000 personas tuvieron que desplazarse de manera forzada, agravando la crisis humanitaria del país. Tras el impacto inicial de la violencia, China impulsó un acercamiento entre las partes para favorecer un alto el fuego, que se acordó inicialmente el 11 de diciembre. Sin

embargo, este acuerdo no fue suficiente para poner fin a la violencia, y los enfrentamientos persistieron. En **enero se logró un nuevo acuerdo de alto el fuego** con la Alianza de los Tres Hermanos, aunque seguía habiendo enfrentamientos armados en diferentes zonas del país. Si bien China es uno de los principales aliados del régimen militar de Myanmar, sus propios intereses en la zona afectada por la violencia, especialmente en la Zona Autónoma de Kokang y su voluntad de poner fin a las actividades ilegales en la zona que afectan fundamentalmente a la economía china, han propiciado los acercamientos con los grupos armados de Myanmar, con los que China ha mantenido históricamente relación.

PAKISTÁN

Se agrava la violencia en el país y escala la tensión internacional con Irán

Se incrementó la violencia en el país, especialmente en las zonas fronterizas a Afganistán, en las que se produjeron atentados y enfrentamientos armados. Según los datos del **Center for Research and Security Studies**, se consolidó la tendencia de alza en la violencia, y 2023 fue el año en el que se registraron más eventos violentos desde 2018. Desde el año 2020 la violencia armada ha repuntado en el país, y diferentes grupos armados que operan en las distintas regiones han incrementado sus actividades. Las fuerzas de seguridad también han incrementado sus operaciones contra estos grupos armados. Entre los meses de octubre y diciembre se produjeron varios episodios de violencia relevantes, entre los que cabe destacar el atentado perpetrado por el grupo armado Tehreek-i-Jihad Pakistan (TJP) en el distrito de Dera Ismail Khan, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa el 12 de diciembre. Al menos 23 soldados murieron y 30 resultaron heridos cuando los insurgentes atacaron instalaciones militares, que colapsaron como consecuencia de las explosiones. Seis integrantes del grupo armado habrían muerto en el ataque suicida, el más mortífero de 2023 en Pakistán.

La zona había sido un feudo del grupo armado talibán TTP y el TJP reivindicó sus vínculos con esta organización. Previamente a este atentado de mayor gravedad se habían repetido ataques y enfrentamientos armados con epicentro en los distritos más próximos a Afganistán, lo que también contribuyó a tensar las relaciones con el país vecino.

En paralelo también se incrementó la violencia en la provincia de Baluchistán, escenario de otro de los conflictos armados que afectan al país y en el que también se repitió la acción armada insurgente, con varios ataques durante el trimestre y con la respuesta de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Además, se produjo el anuncio por parte de Pakistán de inicio de la **deportación de centenares de miles de migrantes y refugiados afganos** que residen en el país, gran parte de ellos llegados tras el ascenso talibán al poder en Afganistán. La expulsión afectaba a todos los extranjeros no registrados en el país: de los cuatro millones de afganos residentes en Pakistán, 1,7 millones no cuentan con residencia legal. Organizaciones de derechos humanos advirtieron del enorme riesgo que esta deportación representaba para la población afgana que debía regresar forzosamente a su país de origen. Por un lado, por el riesgo para su seguridad y por otra parte, por el empeoramiento de la situación humanitaria que la llegada de cientos de miles de personas al país puede representar. En este contexto, la situación se vio agravada en los primeros días de enero con un ataque por parte de Irán contra bases del grupo armado Yeish al Adl en Baluchistán. Este grupo opera en la provincia iraní de Sistán Baluchistán y el Gobierno iraní ha acusado repetidamente a Pakistán de permitirle operar desde su territorio. Ante el ataque iraní, **Pakistán llevó a su vez ataques aéreos** en territorio iraní. Si bien Pakistán e Irán han mantenido buenas relaciones diplomáticas históricamente, estos ataques, en un contexto regional convulso como consecuencia de la ofensiva israelí contra Gaza y en un contexto interno pakistaní de creciente violencia, corren el riesgo de derivar en una escalada de la violencia.

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Bakú y Ereván acuerdan medidas de confianza, pero el proceso negociador afronta una encrucijada

CHIPRE: Se abren oportunidades en el estancado proceso de resolución chipriota

RUSIA – UCRANIA: Riesgo de una guerra de larga duración altamente destructiva

SERBIA – KOSOVO: Acuerdo en la cuestión de las matrículas, pero grandes dificultades en el conjunto del proceso negociador

ARMENIA – AZERBAIYÁN

Bakú y Ereván acuerdan medidas de confianza, pero el proceso negociador afronta una encrucijada

La Administración presidencial de Azerbaiyán y la Oficina del primer ministro de Armenia anunciaron a principios de diciembre diversas **medidas de confianza en un comunicado conjunto** sin mediación de terceras partes y en el que reafirmaban su voluntad de normalizar relaciones y alcanzar un acuerdo de paz sobre la base de los principios de soberanía e integridad territorial. No obstante, en su conjunto el proceso formal de negociaciones atravesaba una fase de incerteza sobre su dirección futura, al tiempo que las perspectivas de construcción de paz con seguridad humana resultaban lejanas.

La encrucijada actual y los déficits en seguridad humana se enmarcan en un escenario regional de profundas transformaciones. La toma militar en septiembre de 2023 por Azerbaiyán de Nagorno-Karabaj desmanteló las estructuras de la región independiente de facto – formalmente disuelta el 1 de enero de 2024– y forzó al éxodo a más de 100.000 personas, la práctica totalidad de su población. La reintegración de Nagorno-Karabaj por la fuerza en Azerbaiyán en 2023 fue el epílogo de la **guerra de 2020 entre Azerbaiyán y Armenia**. En ambas confluyeron factores como décadas de negociaciones estancadas; la hegemonía militar y económica de Bakú y sus alianzas estratégicas con otros actores de la región conformes con el uso de la fuerza, como Turquía; la invasión de Rusia en Ucrania y una cierta realineación de Rusia con respecto a los gobiernos en la región. En ese escenario regional, el proceso negociador entre Armenia y Azerbaiyán quedó restringido a la delimitación de frontera interestatal, reconocimiento de soberanía e integridad territorial y rutas de transporte.

Los elementos de encrucijada en esta nueva etapa son diversos. Por un lado, Bakú y Ereván señalaron en diversos momentos en 2023 que había acuerdo sobre los principios para un tratado final de paz, lo que potencialmente abriría las puertas a un futuro acuerdo de normalización de relaciones. No obstante, en los últimos meses de 2023 continuaron las divergencias sobre los temas en disputa –entre ellos la delimitación de fronteras, con una nueva reunión de las comisiones fronterizas el 30 de noviembre, considerada **más simbólica que efectiva** en algunos análisis. Además, sectores en Armenia expresaron temores sobre riesgos

de futuras incursiones azerbaiyanas. Asimismo, en el nuevo escenario de divisiones geoestratégicas regionales y globales, se acentuó la disputa en torno al formato y las terceras partes. En los últimos meses Azerbaiyán mostró creciente rechazo a la mediación de actores occidentales y canceló o postergó reuniones (desplante a la Comunidad Política Europea el 5 de octubre, acusando a Francia de posición pro-armenia y reclamando que Turquía fuera invitada; postergación de una reunión prevista en octubre en Bruselas entre los dirigentes armenio y azerbaiyano y el presidente del Consejo de la UE; cancelación de otra reunión entre las partes al nivel ministerial en EEUU en noviembre). Por su parte, Armenia, se mantuvo favorable al formato de diálogo facilitado por la UE en Bruselas y continuó distanciándose de Rusia. En paralelo, tomaron mayor protagonismo en el diálogo plataformas y países de la región, como la plataforma 3+3 (Rusia, Turquía, Irán, Armenia, Azerbaiyán y Georgia, aunque Tbilisi aún no ha participado en este foro), foro con potencias regionales reacias a la intervención occidental en la región y que se reunió en Teherán en octubre, con un **comunicado de nueve puntos**. A su vez, Georgia, auspició una reunión entre los primeros ministros armenio y azerbaiyano en octubre en los márgenes del Foro de Tiflis de la Ruta de la Seda, y se ofreció como país mediador.

Más allá del plano negociador formal –acotado a temas con enfoque de arriba-abajo–, sobresalían los enormes retos en seguridad humana, incluyendo en relación a las escasas perspectivas para la población armenia desplazada de Nagorno-Karabaj de poder materializar el derecho al retorno, así como el complejo horizonte en cuanto a sostén económico y atención psicosocial a medio y largo plazo –más allá del alcance inicial de un año del plan de apoyo del Gobierno de Armenia o del llamamiento de emergencia de ACNUR para 2023-2024, que en enero de 2024 ya había recibido el **87% de los fondos requeridos**–. La masiva presencia de minas antipersona en la región, incluyendo en las **áreas alrededor de Nagorno-Karabaj**, continuaba dificultando el retorno de la población azerbaiyana desplazada desde los años noventa. Ya antes del ataque de septiembre, persistían desafíos como la reactivación del trauma en las poblaciones en la región, la falta de confianza a través de las líneas de división del conflicto, la falta de participación de las poblaciones en los procesos políticos, retos identificados por **sectores de la sociedad civil** local. En conjunto, la seguridad humana de las poblaciones de la región requería de priorización y acción multidimensional y de larga duración.

CHIPRE

Se abren oportunidades en el estancado proceso de resolución chipriota

El secretario general de la ONU anunció el 5 de enero el nombramiento de la ex ministra colombiana María Ángela Holguín Cuéllar como enviada personal para Chipre, con el mandato de llevar a cabo buenos oficios para buscar una base común sobre cómo avanzar en la cuestión chipriota. A esa novedad se sumaron otros elementos de oportunidad para el longevo proceso de resolución del estatus de la dividida isla de Chipre. No obstante, las perspectivas eran limitadas, en un contexto de bloqueo del proceso desde el fracaso de las negociaciones en Crans-Montana (Suiza) de 2017, posiciones crecientemente alejadas en los últimos años y cronificación de la partición de facto de la isla. Los elementos de oportunidad incluían, por una parte, **la designación de Holguín Cuéllar**. Era un nombramiento fruto del acuerdo entre las partes, tras unos años sin esa figura a ese nivel, y después de **divergencias y discusiones recientes** sobre los términos de referencia. Para el cargo se designó a una diplomática de larga experiencia. La politóloga y diplomática María Ángela Holguín Cuéllar fue, entre otros cargos, representante permanente de Colombia en las Naciones Unidas, embajadora en Venezuela, ministra de Exteriores de Colombia (2010-2018) y delegada del presidente colombiano y negociadora plenipotenciaria en el proceso negociador entre el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana (2015-2016).

No obstante, desde el fracaso de las negociaciones en Suiza en 2017, ya ha habido sin éxito otros intentos de explorar la existencia de condiciones para el reinicio del diálogo. La posición del liderazgo turcochipriota desde la subida al poder en 2020 de Ersin Tatar ha sido la defensa de una solución de dos Estados, apoyada por Turquía, y que entra en antagonismo con el horizonte de solución de república federal bicomunal y bizonal, que ha sido hasta ahora el marco de Naciones Unidas y que defiende también la parte grecochipriota. Así, a principios de 2024 el liderazgo turcochipriota rechazó de nuevo una reanudación del proceso en el punto en que quedó, y reclamó **un proceso enteramente nuevo**. Algunos análisis en 2023 recomendaban un **enfoque de solución paso a paso** y señalaban oportunidades de negociación en torno a realidades cambiantes en la isla en la esfera económica y social.

Por otra parte, otros factores de oportunidad, aun si limitados, incluyen el reciente acercamiento entre los países garantes Grecia y Turquía. Ambos países mantienen una disputa multidimensional en el Mediterráneo oriental que abarca la cuestión chipriota así como delimitación de fronteras marítimas, de sus zonas económicas exclusivas, sus plataformas continentales y espacio aéreo y la soberanía de diversas islas. En 2023 se produjeron diversos pasos de acercamiento, entre los que destacó **la visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Atenas** en diciembre, donde se reunió con el ministro griego Kyriakos Mitsotakis, y en la que emitieron una **declaración conjunta** en la que

se comprometieron a relaciones amistosas entre los dos países, a resolver cualquier disputa por vías pacíficas y de acuerdo al derecho internacional y a mantener diálogo político sobre cuestión de interés mutuo, entre otros puntos. No obstante, no hay mención explícita de la cuestión chipriota, y el acercamiento no necesariamente repercutirá en el dossier chipriota. Por otra parte, se asistía a un cierto reaceramiento de Turquía y la UE, mientras también la UE se ofreció a un mayor involucramiento en la búsqueda de soluciones a la isla –interpelada para ello por el nuevo dirigente grecochipriota–. Esa triangulación (Turquía, Grecia, UE) podría contribuir a un clima político regional más favorable para la resolución del conflicto sobre el estatus de Chipre, si bien las realineaciones eran volátiles y estrechamente influidas por agendas nacionales y geoestratégicas (recursos naturales, control de fronteras, entre otros), en buena parte alejadas de los retos en seguridad humana y medioambiental de las poblaciones de la isla.

RUSIA – UCRANIA

Riesgo de una guerra de larga duración altamente destructiva

La guerra en Ucrania resultante de la invasión de Rusia entrará en febrero en su tercer año –y en su 11º año desde el inicio de la guerra en el Donbás–, con riesgo de convertirse en un conflicto armado de larga duración y altamente destructivo. Diversos elementos confluían este escenario. Por una parte, la constatación de un estancamiento en las líneas del frente, incluyendo por parte del propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, **Valeri Zaluzhni**, y según diversos análisis la **improbabilidad de una victoria militar**.

Ese estancamiento coexistía con dinámicas de violencia de alta intensidad, como la intensificación de los ataques de Rusia a finales de 2023 y principios de 2024, incluyendo ataques aéreos masivos **el 29 de diciembre** y **el 1 de enero**; o los ataques de Ucrania contra localidades rusas (suroeste) del **31 de diciembre**, unos y otros con víctimas civiles y daños en infraestructura civil. OCHA alertó en su



Foto: Freepik

informe del 11 de enero que desde el 29 de diciembre 125 civiles murieron y otros 550 resultaron heridos y que millones de personas permanecían sin electricidad, agua y calefacción en un contexto de condiciones climáticas extremas. Desde el inicio de la invasión y hasta principios de diciembre, murieron en torno a 10.000 civiles y otros 18.500 resultaron heridos, según datos de la ACNUDH. No hay cifras oficiales de víctimas militares, sino estimaciones dispares, con al menos 25.000 soldados ucranianos fallecidos según el proyecto Libro de la Memoria, o cerca de medio millón de soldados ucranianos y rusos fallecidos o heridos según fuentes de EEUU en el *New York Times*. A su vez, OCHA estimaba que en 2024, 14,6 millones de personas en Ucrania (40% de la población) necesitarán ayuda humanitaria, de las cuales 3,3 millones vivían en localidades en la línea del frente, incluyendo bajo ocupación. Además, 6,3 millones de personas de Ucrania seguían en situación de refugio fuera del país. Como síntoma de la fatiga de la guerra, se incrementaron en meses recientes las protestas en demanda de la desmovilización de soldados por parte de familiares –en gran parte mujeres– tanto en Ucrania como en Rusia, aunque de alcance aun limitado.

Asimismo, en los posibles escenarios entrantes, algunos análisis señalaron que el Mar Negro podría pasar a ser cada vez más central en el conflicto, con ataques rusos contra barcos de carga ucranianos y ataques ucranianos contra la flota e instalaciones rusas. Entre otros hechos recientes, Ucrania atacó a finales de diciembre el buque ruso de guerra *Novocherkassk* en un puerto de Crimea. Los planes de Rusia de establecimiento de una nueva base naval en Abjasia (Georgia) y advertencias de Ucrania de que atacarían su flota en todo lugar, apuntaban a riesgos de ramificaciones regionales inciertas. Los crecientes ataques de Ucrania contra territorio ruso constituían otro elemento de riesgo de escaladas periódicas. Se proyectaban a futuro otros elementos de incerteza, como las elecciones en EEUU en 2024 o el rumbo futuro del apoyo militar y económico euroatlántico a Ucrania. Análisis señalaban también el riesgo de amenaza permanente mutua entre Rusia y Ucrania, más allá de la línea del frente.

Al riesgo de guerra prolongada contribuía el factor de ausencia de diálogo y negociaciones entre las partes en conflicto, y de posiciones maximalistas respecto a su inicio y posibles términos. En 2023 Rusia continuó exigiendo el reconocimiento de la realidad territorial en el terreno y su anexión de cuatro regiones en 2022. Por su parte, Ucrania continuó reclamando la retirada de las tropas rusas como condición previa para cualquier negociación y defendiendo una resolución del conflicto en sus propios términos, recogidos en su plan de paz (la llamada “Fórmula de Paz”), hoja de ruta que promovió en espacios de diálogo sin Rusia.

Como elemento de oportunidad, las conferencias internacionales organizadas por Ucrania para abordar su plan de paz constituían un espacio heterogéneo de discusión sobre vías de resolución del conflicto. La cuarta de estas conferencias tuvo lugar en enero de 2024 en

Suiza, con presencia de representantes de 83 países y participación activa de Sudáfrica y Brasil. No obstante, entre otras limitaciones, a excepción de en la tercera de estas reuniones (en Arabia Saudita, en agosto), China no ha participado, y Rusia –que rechaza el plan de paz de Ucrania– continúa sin ser invitada. Como elemento positivo añadido, Suiza aceptó en enero la propuesta ucraniana de co-organizar una conferencia internacional de alto nivel, que podría ser al nivel de jefes de Estado, aunque con forma y agenda aun por desarrollar. En 2023 se incrementaron las iniciativas de actores internacionales, especialmente de actores no occidentales, de promoción de búsqueda de vías de resolución negociada, aunque sin resultados inmediatos. En conjunto, el escenario de una guerra altamente destructiva, que irradiaba polarización global y que afrontaba riesgo de larga duración, ponía de manifiesto la urgente necesidad de mayores esfuerzos en el ámbito diplomático.

SERBIA – KOSOVO

Acuerdo en la cuestión de las matrículas, pero grandes dificultades en el conjunto del proceso negociador

Los vehículos con matrículas de Kosovo y de Serbia pueden entrar desde principios de enero en el territorio de la otra parte, sin tener que ocultar como hasta entonces las respectivas placas. La decisión de los gobiernos serbio y kosovar resolvió uno de los numerosos elementos en disputa del longevo conflicto no resuelto entre Serbia y Kosovo en torno al estatus de Kosovo. La cuestión de las matrículas había sido un eje de disputa en años recientes, asociada a la exhibición de símbolos nacionales. Las restricciones de una y otra parte en años anteriores para el uso de placas propias en el territorio de la otra habían desembocado en confrontación política así como en incidentes de violencia en las áreas de mayoría serbia del norte de Kosovo en distintos momentos entre 2021 y 2023, entrecruzadas con diversos ejes de disputa. Un acuerdo provisional en septiembre 2021 y otro pacto a finales de 2022 no habían resuelto aún la disputa en ese ámbito.

La resolución de la cuestión de las matrículas en enero de 2024 supuso un avance en sí y potencialmente una cierta oportunidad de relanzamiento del diálogo entre ambos territorios en un escenario altamente complejo y que afrontaba desafíos como las tensiones en torno al norte de Kosovo, los hechos de violencia del 24 de septiembre y, como señaló el informe de octubre del secretario general de la ONU, el deterioro de la ya frágil confianza entre las comunidades de Kosovo y entre instituciones y comunidades, entre otros.

Pasos en 2023 como el Acuerdo sobre la senda de normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia (febrero de 2023) y su anexo del 18 de marzo, de la mano de un mayor impulso y presión diplomática, habían generado ciertas expectativas de avances sustantivos hacia la resolución final del conflicto político entre Kosovo

y Serbia. No obstante, el proceso negociador afronta numerosas dificultades y desafíos que se unen al deterioro de la tensión en el norte de Kosovo y entre Belgrado y Pristina, y desacuerdos procedimentales y de fondo puestos de manifiesto también en 2023. Ante el bloqueo, en octubre de 2023 las terceras partes (UE, EEUU, Francia, Alemania, Italia) presentaron a las partes un nuevo plan para la normalización de relaciones basado en los acuerdos de febrero y marzo y con algunas variaciones. Al hilo de su decisión de autorizar los vehículos con matrículas kosovares, Serbia explicitó en enero que la decisión en ningún caso suponía un reconocimiento de independencia de Kosovo y que Serbia nunca aceptará que Kosovo pase a ser nuevo miembro de la ONU. El acuerdo de febrero y el plan de octubre no exigían a Serbia reconocimiento formal de Kosovo pero sí contemplaban la no objeción al ingreso de Kosovo en organizaciones internacionales. Otros puntos incluían una propuesta de estatuto de asociación de los municipios de mayoría serbia de Kosovo, cuestión dilatada por Kosovo en años anteriores y cuyo rechazo ha alimentado la crisis institucional y social con los actores serbios de Kosovo. En diciembre partidos opositores albanokosovares mostraron su rechazo a la nueva propuesta de estatuto contenida en el plan de octubre, mientras el Gobierno la valoró de forma más positiva que anteriores propuestas. **Algunos análisis**

señalaron el fracaso de las últimas rondas de diálogo por separado de los actores facilitadores con las partes, pero calificaron la propuesta de octubre como el mejor pacto que probablemente Serbia y Kosovo podrían obtener; y recomendaban, por una parte, a Belgrado y Pristina su adhesión a la propuesta, y a actores como la UE y EEUU presión e incentivos para impulsarlo.

No obstante, en su conjunto el proceso afrontaba obstáculos como dinámicas de confrontación de larga duración, polarización local y global, alejamiento entre instituciones y poblaciones y sin mecanismos de participación y apropiación limitada, y desatención al ámbito de la memoria histórica y la justicia transicional, entre otros. El llamado de alerta en octubre por parte de **una veintena de organizaciones de la sociedad civil** de ambos territorios –incluyendo organizaciones de mujeres– sobre el impacto profundo del ataque del 24 de septiembre en las relaciones dentro de Kosovo y entre Kosovo y Serbia y la situación de deterioro previo de las relaciones, así como su llamamiento a las autoridades en todos los niveles a apoyar la generación de vínculos dentro y entre Kosovo y Serbia ponía de manifiesto la fragilidad del contexto y la urgencia de aproximaciones multinivel y participativas que promuevan la transformación de un conflicto atravesado por desafíos locales e internacionales.

ORIENTE MEDIO

LÍBANO: Riesgo de escalada y confrontación directa entre Israel y Hezbollah

LÍBANO

Riesgo de escalada y confrontación directa entre Israel y Hezbollah

Desde el ataque de Hamas del 7 de octubre y el inmediato inicio de la intensa campaña militar israelí sobre Gaza, uno de los escenarios que ha despertado mayor preocupación por el potencial de escalada regional ha sido el de Líbano, por las expectativas de una posible confrontación directa y de mayor intensidad entre Israel y Hezbollah. Los intercambios de proyectiles y otros hechos de violencia han sido incesantes desde entonces. Diversos análisis han destacado que en los últimos meses tanto el Gobierno de Netanyahu como la milicia shií libanesa, aliada de Irán, han intentado calibrar sus acciones con el fin de no desembocar en una guerra total como la que enfrentó a Israel y Hezbollah en 2006. Así, la milicia shií se ha movido en una delgada línea para demostrar su solidaridad con el pueblo palestino, pero, al mismo tiempo, evitar arrastrar a Líbano a un nuevo escenario bélico en momentos en que el país afronta una situación de extrema fragilidad (política, económica y social). Según

analistas, en esta posición pesan también los cálculos de Irán, que no desearía poner en riesgo a Hezbollah, un actor que considera una pieza clave en su estrategia de disuasión ante eventuales ataques de Israel y/o EEUU. En noviembre, en su primer y esperado mensaje público tras los hechos de octubre, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, expresó su apoyo a Hamas, denunció a Israel por sus operaciones en Gaza y a EEUU por su respaldo al Gobierno de Netanyahu, pero **evitó comprometer a su organización en una mayor implicación y protagonismo en el conflicto.**

En las últimas semanas, sin embargo, se han intensificado los hechos de violencia. Tras el colapso de la tregua entre Israel y Hamas –que derivó también en un cese el fuego de facto entre Israel y Hezbollah en el mismo periodo–, las hostilidades se incrementaron. En diciembre Israel amplió sus ataques a zonas residenciales del sur de Líbano y uno de los ataques de Hezbollah causó la primera víctima civil israelí. A principios de 2024 los balances indicaban que al menos 140 combatientes de Hezbollah, 25 civiles libaneses y otros nueve soldados y un civil israelí habían muerto en diversos hechos de violencia desde octubre.

La frágil situación de seguridad en la zona fronteriza también ha motivado que unos 100.000 israelíes fueran evacuados de esta área de manera indefinida, mientras que los ataques israelíes han forzado el desplazamiento de al menos 50.000 personas en el sur de Líbano. Diversas voces apuntan que el Gobierno israelí afronta una creciente presión interna para confrontar a Hezbollah debido a la situación de desplazamiento de los residentes israelíes y también por las opiniones de **dirigentes israelíes de línea dura que argumentan que Israel no puede permitirse el riesgo de tener tan cerca a una fuerza militante mucho más potente que Hamas**, con un arsenal estimado de decenas de miles de proyectiles. En diciembre, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró que Hezbollah sería desplazado de la frontera, por vía diplomática o por otros medios. A mediados de enero, análisis advertían que los asesinatos por parte de Israel de altos cargos de Hezbollah en el sur del Líbano y del número dos de Hamas en un

ataque en Beirut a principios de año amenazaban con derivar en una seria escalada. El jefe del Estado Mayor israelí también admitió que la posibilidad de una guerra total entre Israel y Hezbollah se estaba incrementando. Todo, en un contexto de crecientes incidentes en toda la región directa o indirectamente relacionados con la situación en Gaza –la escalada en el Mar Rojo, los ataques israelíes contra objetivos iraníes en Siria, las acciones de milicias shííes contra intereses de EEUU e Israel en Siria e Iraq, los ataques de Turquía contra actores kurdos en Iraq y Siria, el atentado de ISIS en Irán, o la ofensiva de Teherán en territorio pakistaní contra un grupo separatista baluchi y la consiguiente represalia de Pakistán, entre otros– que revelan una menor contención de diversos actores, los intentos por aprovechar el clima de inestabilidad y la mayor necesidad de hacer demostraciones de fuerza en un escenario extremadamente volátil.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

ecp escola de cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona

Escola de Cultura de Pau
Edifici B13, Carrer de Vila Puig,
Universitat Autònoma de Barcelona 08193
Bellaterra (Espanya)
Tel: +34 93 581 14 14
pr.conflict.escolapau@uab.cat
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:

